

No. **71**

Diciembre 2019

ISSN 2215 - 7816 (En línea)

Documentos de Trabajo

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Estado del arte de la investigación
sobre juventud en Colombia

Jorge Cuartas, Sandra García, Darío Maldonado, Andrés Molano

Serie Documentos de Trabajo 2019

Edición No. 71

ISSN 2215-7816 (En línea)

Edición digital

Diciembre de 2019

© 2019 Universidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Carrera 1 No. 19 -27, Bloque AU, Bogotá, D.C., Colombia. Teléfono: 3394949, ext. 2073

escueladegobierno@uniandes.edu.co

<http://egob.uniandes.edu.co>

British Council

Directora de Educación y Sociedad British Council, Reino Unido

Jo Beall

Jefe de Participación e Investigación en el área de Sociedad

Christine Wilson

Directora de Educación y Sociedad, Colombia

Laura Barragán Montaña

Gerente de Investigación

Emily Morrison

Líder de Proyectos de Educación y Sociedad

Rose Williams

Universidad de los Andes

Directora Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

María Margarita, Paca, Zuleta

Autores

Jorge Cuartas, Sandra García, Darío Maldonado, Andrés Molano

Jefe de Mercadeo y Comunicaciones, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Camilo Andrés Torres Gutiérrez

Gestora Editorial, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Angélica María Cantor Ortiz

Gestor de Comunicaciones, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Camilo Andrés Ayala Monje

El contenido de la presente publicación se encuentra protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que cuente con la autorización previa y expresa por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor solo serán aplicables en la medida en se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair Use); estén previa y expresamente establecidas; no causen un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o titular; y no atenten contra la normal explotación de la obra.

Estado del arte de la investigación sobre juventud en Colombia

Por: Jorge Cuartas¹, Sandra García², Darío Maldonado³, Andrés Molano⁴

Resumen

Este documento hace un balance de la investigación sobre juventud en Colombia que se ha hecho en este siglo y de las fuentes de información disponibles para el análisis de problemas que afectan a la juventud. El documento se centra en temas relevantes sobre el bienestar presente y futuro de los jóvenes: demografía, pobreza y desigualdad, educación, trabajo, salud, conflicto y crimen, salud mental y emocional, participación política. Usando algunas de las bases de datos reseñadas se presenta también una actualización de algunas de las brechas en el bienestar de los jóvenes en Colombia.

Palabras clave: juventud, Colombia, bienestar, demografía, pobreza, desigualdad, educación, trabajo, salud, conflicto, crimen, salud mental, participación política.

Abstract

This document reviews the research about youth in Colombia that has been done in this century, and the sources of information available for the analysis of problems affecting youth. The document focuses on relevant issues about the present and future well-being of young people: demography, poverty and inequality, education, work, health, conflict and crime, mental and emotional health, political participation. Using some of the databases reviewed, an update of some of the gaps in the well-being of young people in Colombia is also presented.

Key Words: Youth, Colombia, Wellness, Demography, Poverty, Inequality, Education, Work, Health, Conflict, Crime, Mental Health, Political Participation

¹ Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes. Correo electrónico de contacto: ja.cuartas10@uniandes.edu.co.

² Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes. Correo electrónico de contacto: sagarcia@uniandes.edu.co.

³ Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes. Correo electrónico de contacto: dmaldonadoc@uniandes.edu.co.

⁴ Facultad de Educación, Universidad de los Andes. Correo electrónico de contacto: a.molano@uniandes.edu.co.

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo	4
2. ¿Qué se sabe sobre los jóvenes en Colombia?.....	9
2.1 Demografía	9
2.1.1 Fecundidad, mortalidad y esperanza de vida	10
2.1.2 Proyecciones poblacionales y bono demográfico.....	11
2.1.3 Composición de los hogares.....	13
2.2 Pobreza y desigualdad	13
2.2.1 Pobreza monetaria	13
2.2.2 Pobreza multidimensional.....	15
2.2.3 Jóvenes que no trabajan ni estudian (ninis).....	16
2.2.4 Desigualdad y movilidad social.....	17
2.3 Educación.....	18
2.3.1 Educación media: cantidad	19
2.3.2 Educación media: calidad	21
2.3.3 Expectativas y aspiraciones relacionadas con la educación superior	23
2.3.4 Educación superior: cobertura.....	24
2.3.5 Educación superior: acceso y permanencia.....	25
2.3.6 Educación superior: calidad y retornos.....	26
2.4 Trabajo	26
2.4.1 Desempleo e informalidad	27
2.4.2 Expectativas laborales, barreras de acceso y políticas públicas	27
2.5 Salud	29
2.5.1 Acceso a la salud y estado de salud	29
2.5.2 Salud sexual y reproductiva	32
2.6 Conflicto y crimen.....	34
2.6.1 Conflicto armado	34
2.6.2 Crimen.....	36
2.6.3 Consecuencias de la exposición a la violencia.....	38
2.7 Salud mental y emocional.....	38
2.7.1 Salud mental general e inequidades.....	39
2.7.2 Las heridas invisibles de la violencia y del conflicto armado en Colombia	40
2.7.3 Violencia, conflicto armado y salud mental en la adolescencia.....	40
2.7.4 Salud mental y movilidad social.....	41

2.8 Participación, preferencias políticas y confianza	42
2.8.1 Preferencias políticas y participación política y en grupos	42
2.8.2 (Des)confianza y corrupción	43
2.8.3 Proceso de paz y posconflicto	45
3. Bases de datos disponibles	46
4. Brechas en el bienestar de los jóvenes: un análisis cuantitativo	52
4.1 Bases utilizadas	52
4.2 Dimensiones y medidas	53
4.2.1 Identidad.....	53
4.2.2 Educación.....	54
4.2.3 Violencia y salud mental.....	54
4.2.4 Confianza	54
4.2.5 Proceso de paz	55
4.2 Análisis	55
4.3 Hallazgos	56
5. Limitaciones y direcciones a futuro	59
6. Referencias	61
7. Anexos	71
7.1 Bases de datos	71
7.1.1 Demografía.....	71
7.1.2 Encuestas de hogares y multipropósito.....	71
7.1.3 Educación.....	73
7.1.4 Salud	75
7.1.5 Violencia y crimen.....	76
7.1.6 Mercado laboral.....	77
7.1.7 Opinión pública, valores, participación política.....	77
7.1.8 Uso del tiempo y prácticas culturales	79

1. Resumen ejecutivo

La siguiente generación de Colombia está viviendo un momento histórico del país, en el cual reducciones en la pobreza, mejoras en las circunstancias educativas y laborales, y la firma del tratado de paz que da fin al conflicto interno más largo del hemisferio occidental están generando oportunidades que pueden impulsar mejoras sustanciales en el bienestar y progreso de la sociedad. No obstante, estos cambios también están acompañados de grandes retos que, de no ser superados, pueden ahondar crisis sociales y comprometer los avances que ha tenido el país.

Aprovechar las oportunidades que se están presentando no será una tarea fácil: a diferencia de otros países, Colombia ya se encuentra en una fase avanzada del bono demográfico (Gutiérrez-Forero y Castro-Escobar, 2015), y este parece no estar siendo aprovechado completamente por las grandes disparidades en oportunidades educativas, en salud y laborales que sitúan a una gran proporción de jóvenes en situaciones de desventaja, por la enorme proporción de empleos informales y por los bajos niveles de ahorro disponibles. Sumado a esto, los niveles de pobreza monetaria y multidimensional continúan siendo muy altos, situando a más de 20 % de la población en condiciones de vulnerabilidad (Dane, 2016^a; García y Ritterbusch, 2014). De este aspecto, lo más preocupante es que la desigualdad económica (siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo) y la casi inexistente movilidad social (Ferreira y Meléndez, 2012) condenan a ciertos jóvenes a no alcanzar su potencial de desarrollo y a transitar trayectorias de vida que no están alineadas con su progreso individual y con el del país.

La desigualdad y falta de movilidad social se observa en múltiples dimensiones de las vidas de los jóvenes en Colombia. En primer lugar, respecto a la educación, situaciones como la pobreza, la exposición a la violencia en el marco del conflicto armado, así como vivir en zonas rurales sitúan a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad que pueden comprometer sus trayectorias de desarrollo. Por ejemplo, los estudiantes de menor nivel socioeconómico y los más expuestos a violencia en sus municipios son, en promedio, quienes tienen mayores dificultades para acceder a la educación y una vez ingresan tienen un mayor riesgo de desertar (Cortes y Vargas, 2012; Sánchez, Velasco, Ayala y Pulido, 2016). De acuerdo a evidencia cuantitativa y a las mismas voces de los jóvenes, factores de riesgo asociados a estas situaciones, tales como el embarazo adolescente, la presencia de pandillas, la necesidad de trabajar y la falta de apoyo familiar son

determinantes para desertar del sistema educativo (Abud, *et al.*, 2015). Adicionalmente, la infraestructura educativa y la oferta de espacios adecuados para el aprendizaje son insuficientes y contribuyen de manera negativa al logro de los jóvenes estudiantes.

A nivel internacional, frente a la calidad de la educación, Colombia se ha ubicado históricamente por debajo del promedio de la OCDE y de otros países de la región como Chile y Uruguay en los resultados de pruebas internacionales como PISA, a pesar de que en los últimos años ha presentado avances considerables (Icfes, 2016). No obstante, este avance, al interior del país, se presentan enormes disparidades en los aprendizajes y desempeños de los estudiantes, donde aquellos de menores recursos económicos, los más expuestos a la violencia y el crimen, quienes viven en zonas rurales, pertenecientes a etnias y aquellos que estudian en colegios oficiales se encuentran en situaciones de desventaja que comprometen su ingreso a la educación superior y al mercado laboral (García *et al.*, 2014). Relacionado con esto, hallazgos de la literatura y de análisis cuantitativos que realizamos con datos representativos para estudiantes de la educación media, revelan que estas situaciones de riesgo también se asocian con menores expectativas y aspiraciones de ingresar a educación superior, lo cual puede suponer un freno comportamental para alcanzar objetivos que impacten positivamente el bienestar de los jóvenes.

En la educación superior el panorama resulta similar. A pesar de avances importantes en la tasa de cobertura, Colombia se sitúa en desventaja frente al contexto internacional y comparativamente con países como Argentina, Chile y Uruguay (Camacho *et al.*, 2017; Melo *et al.*, 2014). Adicionalmente, la tasa de cobertura es desigual entre regiones, siendo superior a 60 % en las ciudades principales del país, pero inferior a 10 % en zonas apartadas y desfavorecidas como Chocó y Amazonas (Melo *et al.*, 2014). El acceso a la educación superior también depende en gran medida de la riqueza de los jóvenes; sin embargo, se han presentado avances importantes en el acceso a créditos educativos y la entrega de información a estudiantes vulnerables, lo cual ha tenido impactos considerables en acceso y permanencia (Melguizo *et al.*, 2016).

En cuanto a la calidad y retornos de la educación superior también existen brechas por estatus socioeconómico (González *et al.*, 2015), las cuales mantienen las disparidades que se presentan desde edades más tempranas. La entrada al mercado laboral no resulta fácil para los jóvenes

colombianos. Mientras la tasa de desempleo general en Colombia es inferior a 10 %, la población con edades entre 14 y 28 años experimenta una tasa de 16 %, siendo de 21 % para las mujeres y superior en cuatro puntos porcentuales frente al promedio de la OCDE (DNP, 2016; OCDE, CEPAL y CAF, 2017).

De quienes ingresan al mercado laboral, 48 % consigue empleos informales, cifra que alcanza 95 % y 83 % para los jóvenes en situación de pobreza extrema y de pobreza respectivamente (OCDE, CEPAL y CAF, 2017). Las dificultades de los jóvenes en conseguir un empleo formal pueden deberse a que no desarrollan adecuadamente las habilidades cognitivas y, especialmente, sociales y emocionales que son demandadas en el mercado laboral: empresarios del país y los mismos jóvenes afirman experimentar problemas relacionados con la puntualidad, el autocontrol, falta de compromiso y de habilidades de comunicación, baja persistencia y baja tolerancia al fracaso (Abud *et al.*, 2015 Florez y Jayaram, 2016; Ritterbusch *et al.*, 2016). El Gobierno Nacional ha generado diversos programas para contrarrestar estas situaciones; sin embargo, gran parte del problema se origina en las brechas en el acceso y calidad del sistema educativo.

La falta de oportunidades educativas y laborales ha generado resultados que sugieren que para el 2014, 20 % de los jóvenes en Colombia no estudiaban ni trabajaban (i.e., ninis), situando al país, junto a Brasil y México, como los que aportan con un mayor número de ninis en la región (Hoyos *et al.*, 2016). El 99 % de los ninis eran jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, lo cual ahonda aún más las brechas sociales y conduce a los jóvenes a actividades riesgosas que generan costos individuales y sociales elevados.

Un factor cardinal de riesgo para los jóvenes es la exposición a la violencia y crimen. Por un lado, Colombia sufrió de unos de los conflictos armados más largos e intensos del mundo, que dejó alrededor de 8'100.180 víctimas, una cifra que corresponde a más de 15 % de la población, afectando principalmente zonas rurales (RNI, 2017). De estas víctimas, la mayoría (7'159.144) fueron víctimas de desplazamiento forzado y muchas otras de homicidios, secuestros, despojo de tierras, minas antipersonales, amenazas y actos terroristas. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 30 % de los hechos victimizantes le ocurrieron a la población joven del país (RNI, 2017). Más aún, los jóvenes han sido las principales víctimas del reclutamiento forzado y de las

desapariciones forzadas, en particular aquellos en situación de pobreza que habitaban zonas rurales, apartadas y desfavorecidas (González, 2016).

A pesar de avances importantes en la terminación del conflicto, particularmente con la firma del tratado de paz con la guerrilla de las Farc, se ha presentado un incremento sustancial en crímenes asociados a fenómenos más urbanos, como, por ejemplo, el hurto a personas, residencias y comercio y las lesiones personales (Mejía, 2014). Esto se refleja en el hecho de que 24 % de los jóvenes han sido víctimas de la delincuencia y más de 40 % de los colombianos afirman sentirse inseguros en su barrio y que sus barrios son más inseguros ahora respecto a meses anteriores. Adicionalmente, ha habido un incremento en el número de pandillas, afectando, principalmente, los barrios y zonas más marginadas y desfavorecidas (Ávila, 2014). Relacionado con esto, el Instituto de Medicina Legal revela que los casos de violencia interpersonal entre jóvenes se han incrementado sustancialmente, pasado de reportarse 49.421 casos en 2011 a 64.011 en 2014.

El conflicto armado y la violencia, en particular el desplazamiento forzado, han desencadenado consecuencias adversas en el bienestar y trayectorias de los jóvenes, condenándolos a situaciones de pobreza crónica, a tener múltiples dificultades para conseguir empleo y un ingreso adecuado, y reduciendo sus niveles de consumo sustancialmente (Ibañez, 2008; Ibañez y Moya, 2010a). En particular, la evidencia muestra que las víctimas de desplazamiento, que en su mayoría llegan a zonas urbanas, difícilmente logran recuperar los niveles de bienestar que tenían antes del hecho victimizante, principalmente porque pierden su capital físico (tierras y animales), humano (conocimiento sobre trabajo agrícola que no es transferible a zonas urbanas) y social al enfrentarse a discriminación y estigma en las ciudades (Ibañez y Moya, 2010b).

Unas de las consecuencias más nefastas de la exposición a la violencia y a la pobreza que ha experimentado la población joven en Colombia son los problemas de salud mental y emocional. Para 2016, aproximadamente 30 % de los adolescentes en el país habían estado expuestos a por lo menos una experiencia traumática en sus vidas, lo que se traduce en que 7,2 % de los adolescentes ha sufrido de algún trastorno mental, siendo los más comunes depresión, ansiedad, fobia social y consumo de sustancias (Ministerio de Salud y Colciencias, 2016). Sumado a esto, los jóvenes que viven en zonas más golpeadas por el conflicto cuentan con mayores prevalencias de trastornos

mentales, que se materializan en sentimientos de tristeza, desesperanza, miedo, trastornos del sueño y dificultades para relacionarse con otros (Gómez-Restrepo *et al.*, 2016a; Torres *et al.*, 2010). Adicionalmente, la población en situación de pobreza tiene mayores prevalencias de trastornos mentales y emocionales (Quitian *et al.*, 2016).

Las afecciones psicológicas y estados emocionales adversos, fuera de ser negativos por sí mismos al afectar el bienestar de los jóvenes, también pueden tener profundas consecuencias sobre sus decisiones y trayectorias de largo plazo. Por una parte, evidencia reciente sugiere que la ansiedad puede comprometer el desempeño académico de los estudiantes (Reali *et al.*, 2016). Por otra parte, el trauma generado y consecuencias psicológicas generadas por la exposición a la violencia tienen el potencial de afectar preferencias y actitudes, lo cual impone una barrera comportamental adicional para que los individuos se desempeñen adecuadamente en diversas dimensiones socioeconómicas (Cuartas, 2017; Cuartas *et al.*, 2016; Moya, 2016; Moya y Carter, 2014). Por último, alguna evidencia sugiere que existe una relación entre la desesperanza y bajas expectativas, que pueden desencadenarse por la exposición a la violencia o pobreza, con las posibilidades de movilidad social de los jóvenes (Cuartas y Moya, 2016). Si bien esta evidencia no es causal, sí sugiere que la desesperanza puede comprometer la agencia, decisiones y acciones de los jóvenes condenándolos a una situación de pobreza crónica.

Frente a temas de participación, preferencias políticas y confianza, Colombia se encuentra en una situación difícil en la medida que sus jóvenes no participan activamente en política ni en grupos sociales, desconfían profundamente de las demás personas y de las instituciones, y ven con pesimismo el presente y futuro del país (Cuartas, 2016; García Sánchez y Rodríguez, 2016; García, Sánchez *et al.*, 2015). Frente a la posibilidad de alcanzar la paz por medio de los acuerdos firmados con las Farc, la proporción de jóvenes que apoya el proceso es inferior a la de adultos, tendencia que se mantiene al analizar la proporción de jóvenes que cree que el perdón y reconciliación con la guerrilla es posible (García, Sánchez *et al.*, 2015). Nuestros análisis sugieren que, en general, los jóvenes en zonas rurales, en situación de pobreza y que habitan municipios más golpeados por la violencia son, en promedio, los que más apoyan el proceso de paz y una salida negociada al conflicto.

Si bien sabemos bastantes cosas sobre los jóvenes, aún falta mucho por aprender. En particular, una revisión sistemática de bases de datos con información relevante sobre jóvenes revela que, si bien en Colombia existen múltiples fuentes de información de gran calidad, no existe ninguna encuesta que sea representativa para este segmento poblacional que aborde temas fundamentales relacionados con identidad, expectativas y aspiraciones, experiencias relacionadas con la violencia y percepciones sobre la guerra y la paz en el país. Las bases de datos disponibles, adicionalmente, no resultan del todo comparables, y no representan a los jóvenes entre 14 y 28 años adecuadamente. Estos vacíos, junto a la coyuntura económica, social y política del país, hacen urgente contar con una fuente de información unificada sobre los jóvenes, que permita entender mejor sus motivaciones, deseos, miedos, perspectivas y expectativas sobre el futuro de la siguiente generación y del país.

A pesar de estas limitaciones, este documento constituye una primera aproximación a entender las vidas, creencias y expectativas de los jóvenes con base en una revisión de información secundaria. Adicionalmente, constituye un insumo primordial para la encuesta y posterior informe de Next Generation en Colombia. Lo que resta del documento se divide de la siguiente forma. Primero, revisamos la literatura y evidencia disponible sobre los jóvenes en el país. En el tercer capítulo compilamos y adelantamos una descripción de las bases disponibles que cuentan con información sobre los jóvenes en Colombia. Posteriormente, utilizamos algunas de estas bases para realizar análisis cuantitativos de brechas por pobreza, exposición a violencia y vivir en zona rural, para complementar lo que sabemos de este segmento poblacional con base en la revisión de literatura. Por último, concluimos discutiendo los hallazgos y las limitaciones.

2. ¿Qué se sabe sobre los jóvenes en Colombia?

2.1 Demografía

En los últimos años la estructura demográfica colombiana ha experimentado cambios importantes relacionados con una disminución sostenida en las tasas de mortalidad y fertilidad (Dane, 2009). Lo anterior ha generado un incremento en el número de jóvenes frente al total de niños y adultos mayores, situando a Colombia en una situación denominada por la literatura como “bono demográfico” (Martínez, 2013), situación en la cual, producto de la transición de la estructura

poblacional, hay un crecimiento en el número de personas productivas (jóvenes) en relación con la población potencialmente inactiva o dependiente (niños y adultos mayores). Esto supone una oportunidad de desarrollo para el país, dado que hay una mayor proporción de la población que potencialmente puede aportar al sector productivo, invirtiendo, ahorrando, contribuyendo a seguridad social y pagando impuestos. No obstante, esta ventana de oportunidad demográfica dura poco y de no aprovecharse puede implicar grandes problemas para el país. Aprovechar el bono demográfico implica: (i) hacer inversiones en el momento adecuado para que esa población joven tenga oportunidades de desarrollo de capital humano (salud y educación) antes de salir al mercado laboral; (ii) reformar el mercado laboral para aumentar el empleo calificado y la formalidad; y (iii) aumentar las tasas de ahorro de ese grupo de jóvenes durante su vida laboral.

2.1.1 Fecundidad, mortalidad y esperanza de vida

De acuerdo con el Dane (2009) y las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), la tasa global de fecundidad ha tenido una reducción importante en los últimos años. La tabla 1 presenta la tasa global de fecundidad en el periodo 1990-2015, con base en los resultados de las ENDS. Se puede observar una reducción en esta tasa, pasando de 2,9 en el periodo de 1987-1990 a 2 en 2012-2015 y llegando a ser inferior al nivel de reemplazo (i.e., 2,1). Esta reducción se ha dado tanto en zonas urbanas como rurales.

Tabla 1. Tasa global de fecundidad, 1990-2015

Periodo	País	Urbana	Rural	Fuente
1987-1990	2,9	2,5	3,8	ENDS 1990
1992-1995	3,0	2,5	4,3	ENDS 1995
1997-2000	2,6	2,3	3,8	ENDS 2000
2002-2005	2,4	2,1	3,4	ENDS 2005
2007-2010	2,1	2,0	2,8	ENDS 2010
2012-2015	2,0	1,8	2,6	ENDS 2015

Fuente: Ministerio de Salud y Profamilia (2016a)

La caída en la tasa de fecundidad ha estado acompañada por una caída en la mortalidad y un incremento en la esperanza de vida de la población. Mientras para 1951 había 123,2 defunciones de menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, esta cifra pasó a ser de 22,3 en el 2005 y se estima que será de 15,12 para el 2020. Por su parte, se estima que la esperanza de vida de los colombianos aumente en 4,3 años para hombres y 4,8 años para mujeres para el mismo periodo de tiempo, alcanzando niveles promedio de 72,6 años en 2005, lo cual pasará a 76,2 años en el 2020

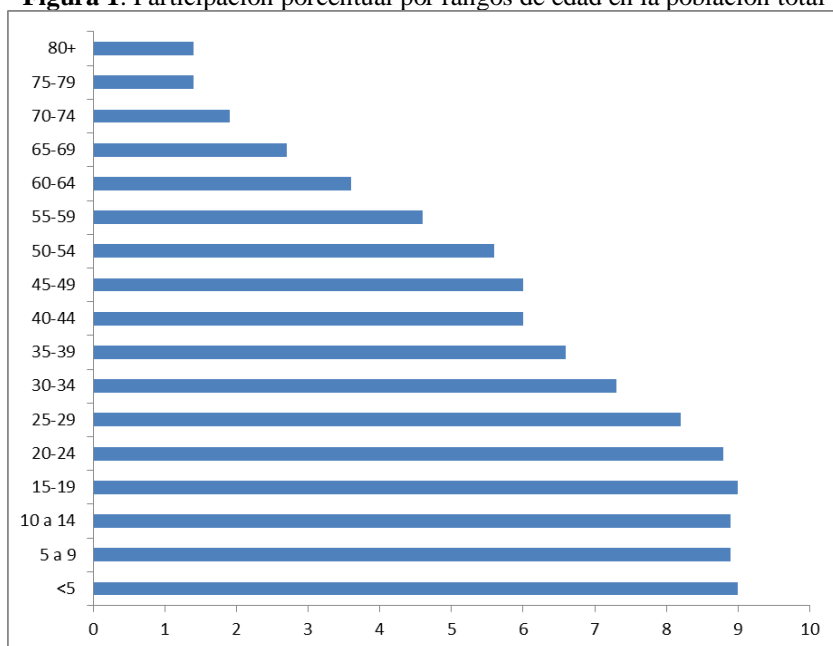
de acuerdo con las proyecciones del Dane. El incremento en la esperanza de vida se explica por reducciones importantes en la probabilidad de morir en todos los rangos de edad, especialmente en los jóvenes (Dane, 2009).

2.1.2 Proyecciones poblacionales y bono demográfico

En el último censo general (2005), la población total alcanzó la cifra de 42.888.592 habitantes para los 1.141.748 km² que tiene el país y, de acuerdo con las proyecciones del Dane, llegará a ser de 50.912.429 habitantes en el 2020 (Dane, 2009; Romero *et al.*, 2015). De esta población, 51 % vive en zonas urbanas y 51 % son mujeres. La figura 1 presenta el porcentaje de la población total por rangos de edad, donde se observa que 9% de la población tiene entre 15 y 19 años, 8,8 % entre 20 y 24, y 8,2 % entre 25 y 29 años (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a). Estos porcentajes se traducen en que para 2015 había alrededor de 12,699,365 jóvenes entre 14 y 28 años en el país.

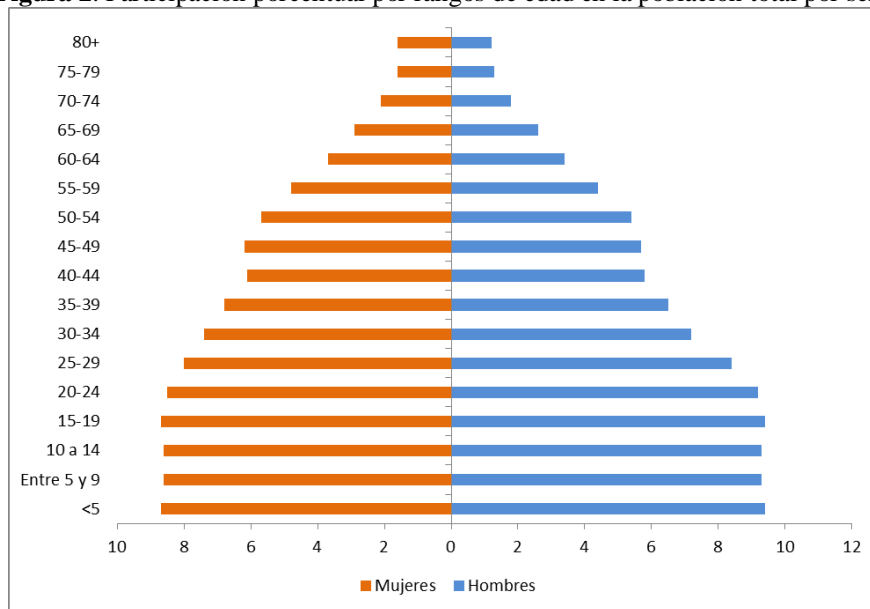
Por su parte, la figura 2 presenta la participación por rango de edad para el total de hombres y mujeres en el país. Con esto, se observa que un total de 9,4 % de los hombres tiene entre 15 y 19 años, 9,2 % entre 20 y 24 y 8,4 % entre 25 y 29. De las mujeres, 8,7 % tiene entre 15 y 19 años, 8,5 % entre 20 y 24, y 8 % entre 25 y 29 años.

Figura 1. Participación porcentual por rangos de edad en la población total



Fuente: elaborado por los autores con base en Ministerio de Salud y Profamilia (2016a)

Figura 2. Participación porcentual por rangos de edad en la población total por sexo



Fuente: elaborado por los autores con base en Ministerio de Salud y Profamilia (2016a)

La disminución en las tasas de fecundidad y mortalidad han situado a Colombia en un bono demográfico, donde la tasa de dependencia⁵ ha pasado a ser del 91,1 en 1951 a 61,6 en 2015 (Martinez, 2013; Ministerio de Salud, 2013). No obstante, hay gran variabilidad al interior del país, donde las regiones Caribe, Noroccidente y Sur Occidente están en plena transición demográfica, mientras el centro del país (Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá) tiene un estado de bono demográfico más avanzado (Gutierrez-Forero y Castro-Escobar, 2015).

No obstante, las menores tasas de fecundidad y aumento de esperanza de vida seguirán generando cambios rápidos en la estructura poblacional, donde para 2020 se presentará una reducción en el grupo de menores de 15 años de 18,1 % y un incremento en mayores de 60 años de 42,1 % (Dane, 2009). Adicionalmente, para el periodo comprendido entre el 2005 y 2020 habrá una reducción en la población entre los 15 y 29 años de 4,7%, alcanzando niveles donde cerca de uno de cada cuatro colombianos será joven (Conpes 173; Dane, 2009). Esta rápida transición genera preguntas sobre si Colombia está aprovechando el bono demográfico, donde algunos ven con preocupación hechos como que menos de una tercera parte de los trabajadores colombianos coticen a seguridad social (Montenegro, 2013).

⁵ La tasa de dependencia es la proporción existente entre la población dependiente (i.e., niños y adultos mayores) y la población activa.

2.1.3 Composición de los hogares

Junto a la transición demográfica han ocurrido cambios importantes en la composición de los hogares. Al igual que otros países de América Latina, en Colombia ha ocurrido un descenso importante en el número de familias extendidas y compuestas, dando paso a parejas sin hijos y hogares sin núcleo conyugal, al igual que incrementos en hogares monoparentales y con jefatura femenina (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a). En particular, los resultados de la ENDS muestran que mientras 33,2 % de los hogares está compuesto por familias nucleares biparentales, alrededor de 24 % se compone por monoparentales. De igual forma, cifras de la misma encuesta revelan que el tamaño de los hogares ha caído de forma importante, pasando de tener 4,1 personas en promedio para el 2005 a 3,8 en 2010 y 3,5 en 2015 (3,5 en zonas urbanas y 3,6 en zonas rurales).

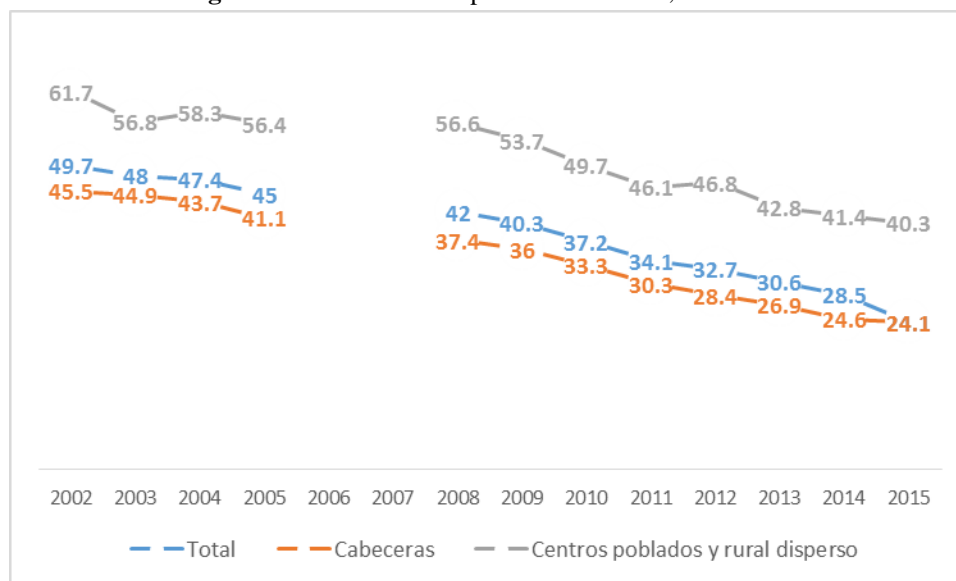
2.2 Pobreza y desigualdad

En la última década Colombia ha experimentado una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región. Junto a esto ha ocurrido una importante reducción en los niveles de pobreza. No obstante, la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema, los niveles de desigualdad (tanto en resultados como en oportunidades), y la inmovilidad socioeconómica siguen siendo problemáticas sin resolver en el país.

2.2.1 Pobreza monetaria

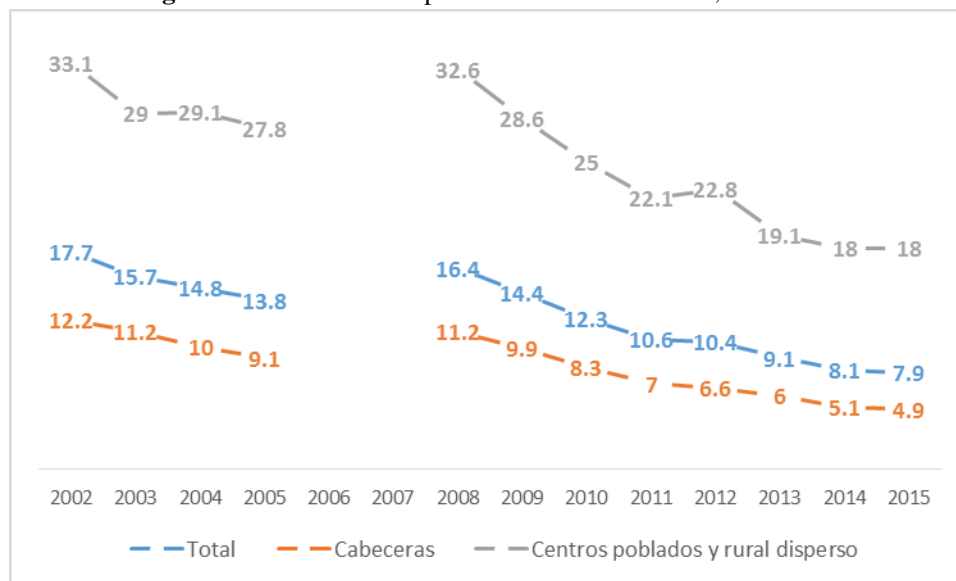
Los niveles de pobreza monetaria en Colombia han tenido una reducción importante. La figura 3 presenta la evolución de la proporción de hogares en situación de pobreza desde 2002 hasta 2015, mientras la figura 4 presenta la evolución de la pobreza extrema tanto para cabeceras como centros poblados y zonas rurales dispersas en el mismo periodo.

Figura 3. Incidencia de la pobreza monetaria, 2002-2015



Fuente: Dane (2016a)

Figura 4. Incidencia de la pobreza extrema monetaria, 2002-2015



Fuente: Dane (2016a)

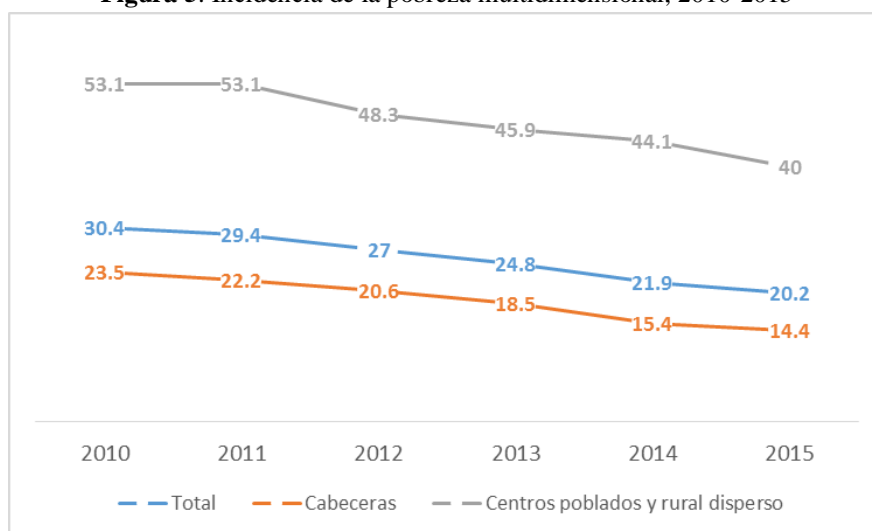
En las figuras 3 y 4 es posible observar que tanto la pobreza como la pobreza extrema han disminuido considerablemente en el país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. En particular, la pobreza pasó a ser de 49,7 % en 2002 a 24,1 % en 2015, mientras la pobreza extrema pasó de 30,4 % a 20,2 % para los mismos años, lo cual implica reducciones de 51 % y 33 %, respectivamente. No obstante, existe una brecha importante en los niveles de pobreza entre zonas urbanas y rurales: para 2015 ambas incidencias fueron considerablemente superiores en centros

poblados y zonas rurales dispersas (pobreza de 40,3 % y pobreza extrema de 18 %) en comparación con las cabeceras municipales (pobreza de 24,1 % y pobreza extrema de 4,9 %).

2.2.2 Pobreza multidimensional

Complementando los anteriores resultados, la figura 5 presenta la evolución de los niveles de pobreza multidimensional por zona entre 2010 y 2015. Se observa una reducción importante en la incidencia de la pobreza, pasando de una cifra superior a 30 % en 2010 a 20,2 % para el año 2015. Para el caso de la pobreza multidimensional también existe un gradiente importante entre zonas urbanas y rurales, tanto en niveles absolutos a lo largo de los años como en la reducción de la pobreza: mientras en cabeceras la reducción de la pobreza multidimensional para el periodo ya mencionado fue superior a 63 %, para centros poblados y rural disperso fue solo de 32,7 %. Adicionalmente, hay una gran desigualdad entre regiones, con niveles de incidencia de 33,8 % y 31,2 % para la región Pacífica y Atlántica, respectivamente, mientras para Bogotá fue de 4,7 % (Dane, 2016a).

Figura 5. Incidencia de la pobreza multidimensional, 2010-2015



Fuente: Dane (2016a)

La tabla 2 presenta el porcentaje de hogares con privaciones en las diferentes dimensiones que componen el índice de pobreza multidimensional. Es posible observar que las privaciones que más experimentan los hogares del país son tener trabajo informal, bajo logro educativo y rezago escolar. Para cabeceras, las mayores privaciones son rezago escolar, bajo logro educativo y trabajo

informal, mientras en centros poblados y rural disperso son no contar con aseguramiento en salud, analfabetismo, trabajo informal y rezago escolar.

Tabla 2. Porcentaje de hogares pobres por privación para el total Nacional.

Variable	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
Rezago escolar	29,5	70,1	37,5
Bajo logro educativo	48,2	27,3	15,9
Trabajo informal	74,5	39,3	37,8
Sin acceso a fuente de agua mejorada	9,8	11,2	22,1
Sin aseguramiento en salud	11,2	2,4	81,6
Material inadecuado de pisos	4,6	10,5	22,1
Analfabetismo	10,2	10,6	90,6
Inadecuada eliminación de excretas	10,1	2,3	8,5
Inasistencia escolar	3,0	1,5	7,5
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	9,1	2,3	5,6
Trabajo infantil	3,2	7,0	6,4
Hacinamiento crítico	10,6	1,7	1,8
Desempleo de larga duración	10,2	9,6	11,2
Material inadecuado de paredes exteriores	1,7	6,9	10,9
Barreras de acceso a servicios de salud	6,5	5,9	9,0

Fuente: Dane (2016a)

Sumado a esto, García y Ritterbusch (2014) desarrollan una medida de pobreza multidimensional específicamente para niños y adolescentes, utilizando métodos mixtos. Las autoras encuentran que 34 % de niños y adolescentes en Colombia viven en situación de pobreza bajo este enfoque, cifra inferior en 10 puntos porcentuales respecto a 2008. Con un análisis cuantitativo, encuentran que las dimensiones que más contribuyen a la pobreza de los adolescentes son la falta de acceso a agua potable, hacinamiento y falta de acceso a parques y áreas verdes. De acuerdo a la voz de los mismos adolescentes, las dimensiones que más contribuyen a su pobreza son la falta de acceso a educación y a tiempo recreacional (García y Ritterbusch, 2014). El mismo estudio encuentra que la pobreza en adolescentes se concentra principalmente en las regiones del Pacífico y Atlántico, con una incidencia de 75 % en Chocó y 65 % en La Guajira, mientras para Bogotá esta cifra llega a 18 %.

2.2.3 Jóvenes que no trabajan ni estudian (ninis)

Una de las más preocupantes expresiones de la pobreza en los jóvenes es la falta de acceso a educación y las barreras para acceder al mercado laboral. En particular, de acuerdo con un estudio reciente del Banco Mundial, 20 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en Latinoamérica no

estudian ni trabajan (i.e., ninis), lo que equivale a 1 de cada 5 jóvenes (Hoyos *et al.*, 2016). El mismo estudio encuentra que de Brasil, Colombia y México son los países con mayores cifras absolutas de ninis, y hay una mayor prevalencia en zonas rurales y hogares en situación de pobreza.

En Colombia, para 2014, 20 % de jóvenes entre 15 y 29 años fueron catalogados como ninis, de los cuales 99 % eran jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad (OCDE, CEPAL y CAF, 2017). Adicionalmente, la cifra es superior para las mujeres, con una brecha de 20 puntos porcentuales. Mirando detenidamente rangos de edad, las cifras de la OCDE (2017a) revelan que el número de ninis entre 15 y 19 pasó de 18,51 % en 2013 a 17,90 % en 2015, mientras para el rango de 20 a 24 años pasó de 25,31 % a 24,75 % en el mismo periodo.

Que un joven en este rango de edad, particularmente en situación de pobreza, no trabaje ni estudie resulta problemático en la medida en que contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza, se asocia a vinculación con delincuencia y violencia, y genera un desaprovechamiento del bono demográfico en el país (Hoyos *et al.*, 2016). Entre los principales factores asociados a no trabajar ni estudiar en la juventud están el matrimonio antes de los 18 años, el embarazo adolescente y, principalmente, la deserción temprana del sistema educativo para ingresar el mercado laboral, que se traduce posteriormente en un menor desarrollo de habilidades que incrementa notablemente el riesgo de desempleo (Hoyos *et al.*, 2016).

2.2.4 Desigualdad y movilidad social

Fuera de la pobreza, Colombia enfrenta una gran problemática de desigualdad, siendo de los 20 países más desiguales del mundo. Para el 2015, el índice de desigualdad de Gini de Colombia fue de 0,522⁶, lo cual, dentro de otras cosas, se traduce en que 20 % del ingreso del país se concentre en 1 % de la población (Dane, 2016a). La desigualdad, en general, es menor en zonas rurales (0,454) frente a urbanas (0,498).

De acuerdo a Ferreira y Meléndez (2012), entre 17,6 % y 23,6 % de la desigualdad en ingresos se debe a un tipo de desigualdad que resulta ser intrínsecamente injusta e indeseable: la desigualdad

⁶ Otros países de la región tienen un índice mucho menor. Por ejemplo, para Venezuela es de 0,39, para Chile es de 0,49, para Perú 0,48, para Argentina 0,41 y para Uruguay 0,38.

de oportunidades. En el país, las oportunidades distribuidas más desigualmente son el acceso a la educación, a ambientes seguros, el no hacinamiento, la seguridad alimentaria y el saneamiento adecuado (Vélez y Torres, 2014). Para este caso, nuevamente, las zonas urbanas y las regiones Pacífica y Atlántica son las más desfavorecidas, mientras Bogotá y la región Oriental gozan del mayor acceso a oportunidades. Las principales circunstancias asociadas a la desigualdad de oportunidades son el tamaño de la ciudad, la zona (rural), el ingreso per cápita del hogar, la educación de los padres y la presencia en el hogar de dependientes hijos y discapacitados (Vélez y Torres, 2014).

El país, fuera de desigualmente, tiene unos niveles de inmovilidad social muy preocupantes, específicamente para los individuos que provienen de hogares en situación de pobreza. Por ejemplo, una investigación de García *et al.* (2015) revela que mientras 93 % de los individuos cuya madre tiene educación superior alcanza dicho nivel educativo, tan solo 19 % de los individuos cuya madre tiene solo primaria logran llegar a educación superior. El mismo estudio revela que existen grandes diferencias regionales, donde la asociación entre la educación de la madre y la propia (que es una medida de movilidad social y que entre más se acerque a 1 indica mayor inmovilidad social) es de 0,57 en Bogotá, mientras en el Pacífico llega a ser de 0,99. Los principales factores asociados a la baja movilidad en Colombia son la pobreza local (necesidades básicas insatisfechas en el municipio) y la presencia de conflicto y violencia.

Los niveles de pobreza, desigualdad y baja movilidad social afectan a los jóvenes del país en múltiples dimensiones, reduciendo sus posibilidades educativas y laborales, su acceso a servicios de salud, sus niveles de exposición a la violencia y el crimen e incluso en su salud mental y emocional. En las siguientes secciones discutimos más al respecto.

2.3 Educación

La cantidad y calidad de educación tienen consecuencias importantes a nivel individual y social. Diversos estudios han mostrado que existe una asociación importante entre los años de escolaridad y la calidad educativa con los niveles de pobreza, crecimiento económico, desigualdad y estabilidad política (e.g., Duflo, 2001; Glaeser *et al.*, 2004; Hanushek y Woessmann, 2012). Así mismo, tanto los años de escolaridad como la calidad de la educación se asocian con los salarios

percibidos en la adultez (e.g., García, Maldonado y Rodríguez, 2014; Saavedra *et al.*, 2011 para Colombia). No obstante, la evidencia sugiere que la educación no ha logrado ser una herramienta de movilidad social en Colombia (Angulo *et al.*, 2012; Montenegro y Meléndez, 2014), lo cual puede deberse a las enormes inequidades tanto en cantidad como en calidad de la educación por riqueza, zona geográfica, pertenencia étnica, exposición a la violencia y otras condiciones sobre las cuales los hogares difícilmente pueden incidir.

De acuerdo con datos de Barro y Lee (2010), en 2010 los años de educación promedio para mayores de 25 años en Colombia era de 7,34, mientras que países de la región tenían tasas considerablemente mayores, tal como es el caso de Argentina (9,28), Chile (9,74) y México (8,52). A pesar de esto, en los últimos años el país ha adelantado esfuerzos importantes en materia de educación, alcanzando una inversión pública correspondiente a 4,9% del Producto Interno Bruto para 2013 en dicho rubro⁷, y consiguiendo mejorías tanto en cobertura como en desempeño a nivel nacional e internacional (ver Dueñas, 2016). A continuación, presentamos evidencia relacionada con educación para los jóvenes en Colombia, concentrándonos en temas de cantidad y calidad de la educación en la media, y de acceso y calidad de la educación superior.

2.3.1 Educación media: cantidad

El sistema educativo colombiano comprende cuatro periodos fundamentales: preescolar, primaria, secundaria (9 años de educación obligatoria hasta este punto) y media, que corresponde a los grados décimo y undécimo. Nos concentramos en el nivel de educación media, en la medida que la entrada teórica a estos grados comprende las edades que contempla la definición de joven en el país (15 años para décimo y 16 para undécimo).

De acuerdo con datos administrativos de la resolución 166 del Ministerio de Educación, procesados por García *et al.* (2016), de los 13.026 establecimientos educativos oficiales en Colombia, 6.394 ofrecen educación completa (es decir, desde preescolar hasta undécimo), y 6.431 ofrecen media. La matrícula oficial en media de 830.817 estudiantes, 444.519 en décimo y 369.543 en undécimo, lo que corresponde a una cobertura neta de 41 %. Esta matrícula resulta inferior a la presente en secundaria (2.485.039) y primaria (3.334.596), y resulta menor en zonas rurales

⁷ <http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>

(149,567) que urbanas (676,548). Adicionalmente, hay disparidades considerables por ingresos y regiones (e.g., Conpes 173 del 2014; Cortes y Vargas, 2012), donde departamentos como Chocó, La Guajira y Meta tienen coberturas por debajo de 20 %. Parte de la disparidad en tasas de cobertura puede ser explicada por variación en el número de establecimientos que ofrecen media por región (García *et al.*, 2016).

La gran diferencia en los niveles de matrícula entre la media con secundaria y primaria puede explicarse por deserción acumulada a lo largo de la vida escolar. Sánchez, Velasco, Ayala y Pulido (2016) encuentran que 75 % de alumnos observados en sexto grado logran alcanzar grado noveno, 69 % alcanzar grado décimo y 64 % grado undécimo. Las tasas de deserción, que han tenido reducciones importantes en los últimos años (Delgado, 2014), resultan ser relativamente homogéneas entre los grados de secundaria y media (Sánchez *et al.*, 2016). No obstante, existen disparidades importantes en la deserción por género (con un mayor riesgo de deserción para los hombres), estrato socioeconómico (con un riesgo de deserción sustancialmente mayor para los jóvenes en estrato 1 en comparación con otros estratos), región (siendo Bogotá la región más favorecida, y el Llano, Pacífico y Caribe las más rezagadas), y exposición al conflicto armado. Por otra parte, ser beneficiario de programas sociales y asistir a jornada completa del colegio están asociados con un menor riesgo de deserción (Sánchez *et al.*, 2016; Rodríguez y Sánchez, 2012). Adicionalmente, hay una asociación importante entre repitencia y deserción, que resulta preocupante en la medida que 29 % de estudiantes en secundaria y media repiten al menos un año (Sanchez *et al.*, 2016).

Evidencia cualitativa sugiere que, de acuerdo a las voces de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad, los principales riesgos para desertar del sistema educativo son el embarazo (o el convertirse en cabeza de hogar por embarazo de la pareja), las pandillas, la necesidad de trabajar y, muy especialmente, la falta de apoyo de la familia (Abud, *et al.*, 2015). Sobre este último punto, información de pisa 2015 confirma que Colombia se ubica por debajo del promedio de la OCDE y de otros países de la región en el porcentaje de estudiantes que reporta hablar con sus padres después del colegio, que sus padres los apoyan en situaciones difíciles y que sus padres se interesan en las actividades del colegio (OCDE, 2017b). La evidencia sugiere que la exposición al conflicto también es un factor de riesgo para permanecer en el sistema educativo, especialmente para

jóvenes (Rodríguez y Sánchez, 2012). Este efecto también ha sido analizado con choques de precios en materias primas, encontrando una relación entre incrementos en precios con mayor probabilidad de desertar para ingresar al mercado laboral tempranamente (Santos, 2014).

Frente a la capacidad de cobertura de los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación afirma que ha habido una constante mejoría en la infraestructura educativa del país (Ministerio de Educación Nacional, 2010). Sin embargo, un estudio realizado en el segundo semestre del 2015 por Lugo, Hernández y Colmenares (2016), en el cual se utilizó información espacial relacionada con áreas, configuraciones espaciales y organización de predios, edificación y espacios académicos, al igual que información sobre población inscrita, entrega un panorama menos alentador. En primer lugar, el estudio concluye que hay una sobreutilización del espacio considerando estándares de metros cuadrados por estudiante (siendo este de 69 % en zonas urbanas y 56 % en zonas rurales), procesos de construcción discontinuos que generan espacios potencialmente desarrollables sin utilizar, y una situación deficitaria de bibliotecas y laboratorios (Lugo *et al.*, 2016).

2.3.2 Educación media: calidad

La Ley General de Educación que rige en Colombia establece que la educación secundaria y media debe desarrollar capacidades básicas y capital cultural para el ejercicio de la ciudadanía, contemplando así competencias comunicativas (lectura, escritura y revisión crítica de información), matemáticas (pensamiento lógico y numérico), en ciencias (investigación de fenómenos naturales y sociales) y ciudadanas (convivencia pacífica, participación en la democracia, respecto por la diferencia). No obstante, resultados en pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional dan cuenta de enormes disparidades en el desarrollo de habilidades, los aprendizajes y el desempeño de los estudiantes a través de regiones, tipo de colegio e ingresos, lo cual supone un freno a la movilidad social (García *et al.*, 2014) y muestran un rezago importante en la calidad educativa del país frente a otros países de la región y frente a países con características socioeconómicas similares (Icfes, 2016). En general, la calidad educativa en Colombia es baja y bastante inequitativa (García *et al.*, 2014).

Para analizar la calidad de la educación en Colombia, contamos con dos fuentes de información principales: en primer lugar, las pruebas Saber 11, que se realizan semestralmente a estudiantes que están culminando sus estudios de media. Estas pruebas permiten ver avances en los aprendizajes al interior del país, inequidades en el desempeño y factores asociados al logro. Por otra parte, las pruebas PISA, que se han realizado en el 2006, 2009, 2012 y 2015 en Colombia, permiten ver los resultados de los estudiantes de quince años en el país comparativamente con otros países. Adicionalmente, con el objetivo de identificar factores asociados al logro, con las pruebas PISA se realizan cuestionarios contextuales a los estudiantes, familias, docentes y rectores.

En primer lugar, frente al aprendizaje de los jóvenes colombianos respecto a otros países, los resultados en pruebas internacionales tales como PISA han sido fuente de preocupación nacional, expresándose incluso en prensa con titulares como “Colombia vuelve a rajarse en las pruebas de educación PISA” (*El Espectador*, 11 de mayo del 2013); “Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas PISA” (*El Tiempo*, 9 de Julio de 2014); e incluso “Vergüenza: Colombia entre los peores en educación” (*Semana*, 13 de marzo de 2013). Para las pruebas PISA 2009, Colombia ocupó el puesto 58 en matemáticas, 52 en lectura y 54 en ciencias, siendo uno de los países de más bajo desempeño. A pesar de que en las pruebas del 2015 Colombia se ubicó en el séptimo puesto de los países con una mayor mejoría en los puntajes de matemáticas y en el cuarto lugar para mejoras en los puntajes de lectura (Icfes, 2016), el país aún cuenta con resultados relativamente bajos.

En términos de inequidades al interior del país, los estudiantes de menores recursos económicos, en zonas rurales, pertenecientes a grupos étnicos y que estudian en colegios oficiales obtienen en promedio resultados inferiores (Delgado, 2014; García *et al.*, 2014). Evidencia cualitativa revela que los estudiantes en Colombia (especialmente desfavorecidos) consideran que existe una brecha importante entre los contenidos de clase y de la prueba Saber, lo cual limita sus posibilidades de desempeñarse adecuadamente y, por ende, de acceder a educación superior (Florez y Jayaram, 2016). Adicionalmente, evidencia reciente sugiere que estudiantes expuestos a ambientes violentos obtienen peores resultados en pruebas estandarizadas: choques de violencia semanas antes de las pruebas Saber reducen los resultados que los estudiantes obtienen (Cristancho, Harker y Molano, 2016; Haugan, 2016). Este último punto resulta preocupante, al considerar la gran exposición de

los jóvenes colombianos a hechos delictivos y victimizantes en las zonas que frecuentan (ver sección de conflicto y crimen).

Las inequidades socioeconómicas se hacen aún más visibles al analizar el porcentaje de estudiantes que pueden considerarse resilientes en Colombia frente a otros países. Se consideran estudiantes resilientes aquellos que obtienen desempeños sobresalientes a pesar de vivir en contextos socioeconómicos adversos (O'Dougherty *et al.*, 2012). La resiliencia es una cualidad importante a nivel individual, al permitir sobreponerse a ambientes adversos y, a nivel de los países, al existir una correlación significativa entre el porcentaje de estudiantes resilientes y el desempeño del país en las pruebas PISA (Agasisti y Longobardi, 2014). Con los datos de las pruebas PISA 2015 (OCDE, 2016) se observa que 11,4 % de los estudiantes colombianos pueden considerarse resilientes, una cifra inferior a la del promedio de la OCDE (29 %) y de países de la región como México (12,8 %), Chile (14,6 %) y Uruguay (14 %).

2.3.3 Expectativas y aspiraciones relacionadas con la educación superior

El desempeño de los estudiantes se asocia, entre otras cosas, con sus creencias educativas, en particular con sus expectativas y aspiraciones (Dweck, Walton y Cohen, 2014). Según datos representativos a nivel nacional para los estudiantes de educación media, 62 % aspira ingresar a un programa universitario, siendo superior en zonas urbanas (66 %) que en rurales (54 %). En contraste, tan solo 54 % cree que va a poder hacerlo (García *et al.*, 2016). En zonas rurales, sin embargo, una mayor proporción de estudiantes espera ingresar a programas técnicos o tecnológicos (28 % contra 21 % en zonas urbanas) o buscar un trabajo una vez se gradúe (13 % contra 9 %). A pesar de esto, de acuerdo con los resultados de PISA 2015, Colombia es, junto a Corea del Sur, Qatar y Estados Unidos, el país con mayor número de estudiantes que esperan tener un título universitario, teniendo que más de tres de cada cuatro estudiantes tiene esta aspiración contra solo 44 % del promedio de la OCDE (OCDE, 2017b). Estas expectativas y aspiraciones, no obstante, pueden verse frustradas por falta de oportunidades y barreras de acceso a la educación superior.

2.3.4 Educación superior: cobertura

La educación superior en Colombia comprende tres niveles básicos de formación: educación universitaria (programas con duración aproximada de 4 o 5 años), tecnológica (3 años) y técnica (2 años), con programas presenciales o a distancia. En los últimos años, Colombia ha experimentado avances importantes en materia de cobertura y calidad en educación superior. Entre el 2000 y 2012, en promedio el país destinó cerca del 0.93% del PIB nacional a educación superior (Melo *et al.*, 2014).

Desde 2003, el Ministerio de Educación Nacional regula la oferta de programas de educación superior mediante la expedición de un registro calificado que certifica el cumplimiento de unos requerimientos mínimos de calidad, sin el cual las instituciones educativas no pueden operar. Adicionalmente, Colombia cuenta con un sistema de acreditación de alta calidad, que certifica el cumplimiento de estándares de alta calidad mediante procesos de autoevaluación y evaluación de pares. En Colombia cuentan con registro calificado 40 instituciones educativas técnicas-profesionales, 60 tecnológicas, 125 universitarias con especialización como grado máximo y 134 con maestrías y doctorados, de las cuales 30 % son públicas (Camacho *et al.*, 2017).

Recientemente, se ha presentado un avance importante en términos de cobertura, con un incremento en el número de pregrados de 487.448 en 1990 a 1.841.282 en 2012, siendo superior al presentado en educación secundaria (González-Velosa *et al.*, 2015). Esto ha generado que se alcance una cobertura de 42,4 %, la cual sigue siendo inferior considerando un contexto internacional y menor a la presente en países de la región como Argentina, Chile o Uruguay, países con tasas superiores a 60 % (Melo *et al.*, 2014). No obstante, el número de graduados de educación superior y la matrícula se han incrementado en 30 % y 48 %, respectivamente en una década, lo cual ha estado acompañado por un aumento casi de 100 % en el número de programas ofrecidos (Camacho *et al.*, 2017). Aún con esto existen inequidades importantes en cobertura, teniendo regiones como Bogotá que alcanzan tasas de 75,6 %, en contraste a regiones como Chocó, Amazonas y Putumayo con tasas menores a 10 %.

2.3.5 Educación superior: acceso y permanencia

En Colombia existen grandes disparidades en la matrícula en educación superior por condiciones socioeconómicas: mientras 54 % del total de estudiantes de ingreso medio-alto (estratos 3 a 6) que terminan la educación media (60 % del total) logran matricularse en una institución de educación superior, tan solo 25 % de estudiantes de bajos ingresos (estratos 1 y 2) que terminan educación media (45 %) logran ingresar a este nivel educativo (Melguizo *et al.*, 2016). Por otra parte, aproximadamente uno de cada dos estudiantes no termina sus estudios de educación superior (Melo *et al.*, 2014), lo cual se asocia, de forma similar a lo que ocurre en la media, a características socioeconómicas de los estudiantes.

Una posible explicación para el bajo acceso y la baja permanencia de los estudiantes de menores ingresos es sencillamente la presencia de restricciones de liquidez. No obstante, desde 2002 el Gobierno Nacional, con apoyo del Banco Mundial, ha iniciado esfuerzos importantes con programas de financiación como el de Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES), que entrega créditos para educación superior sin intereses, condonables para los mejores estudiantes y con menores condicionalidades, facilitando el aprovechamiento de los mismos por parte de los estudiantes de menores ingresos. Una evaluación de impacto reciente muestra que el programa, fuera de tener efectos importantes sobre acceso, ha incrementado la permanencia y el desempeño de los beneficiarios (Melguizo *et al.*, 2016). Programas similares más recientes, como Ser Pilo Paga, también han tenido efectos importantes sobre el ingreso de estudiantes desfavorecidos a universidades de alta calidad (Londoño-Vélez, Rodríguez y Sánchez, 2017).

Por otra parte, evidencia cualitativa revela que jóvenes desfavorecidos sienten que no cumplen los requisitos para acceder a la educación superior (por puntajes en pruebas Saber, principalmente) y, muchas veces, ven como una barrera al acceso la falta de información sobre oportunidades educativas en sus comunidades (Abud *et al.*, 2015). Sin embargo, evidencia reciente señala que entregar información a estudiantes de undécimo en Bogotá sobre oportunidades educativas parece no tener efectos sobre acceso, aunque sí efectos de pequeña magnitud sobre puntajes en las pruebas Saber 11 (Bonilla *et al.*, 2016). Estos resultados, sin embargo, se obtuvieron en una muestra para Bogotá, lo cual no puede generalizarse a otras regiones con condiciones socioeconómicas

diferentes donde posiblemente la falta de información sea una barrera importante para acceder a la educación superior.

2.3.6 Educación superior: calidad y retornos

Desde 2004 se utilizan las pruebas Saber Pro como instrumento para medir la calidad de la educación superior en Colombia, complementadas por las pruebas Saber Técnico y Tecnólogos implementadas recientemente. Los resultados en estas pruebas, junto a otro tipo de evidencia, sugieren una gran heterogeneidad en la calidad de la educación superior en el país, donde existen instituciones muy bien organizadas y reconocidas por su excelencia, y otras instituciones desordenadas y con bajos niveles de calidad (Camacho *et al.*, 2017; Melo *et al.*, 2014). De igual forma, hay inequidades en los resultados que los estudiantes obtienen en las pruebas Saber entre establecimientos de educación superior privados (en promedio obtienen mayores puntajes) y públicos (Cayon *et al.*, 2017). Es importante notar que al interior de establecimientos privados y públicos también existe una enorme heterogeneidad en calidad, resultados, y retornos.

Por otra parte, si bien evidencia reciente sugiere que la tasa interna de retorno de la educación superior en Colombia se ubica entre 0,074 y 0,128 (García-Suaza *et al.*, 2014), González *et al.* (2015) encuentran que existe una enorme heterogeneidad en los retornos netos, donde para una proporción importante de estudiantes, particularmente los de menores recursos económicos, los retornos incluso son negativos. El mismo estudio señala que existe una gran dispersión en retornos por tipo de carrera, e incluso entre diferentes instituciones ofreciendo la misma carrera. Sumado a esto, una matrícula más cara o contar con acreditación de calidad tampoco parecen asociarse con mayores retornos (González *et al.*, 2015).

2.4 Trabajo

Colombia pasó a tener una tasa de desempleo superior a 15 % en 2001 a cifras de un dígito desde 2013 (Banco de la República, 2017). No obstante, el desempleo sigue siendo un problema relevante en el país, con ciudades que alcanzan tasas superiores a 15 % como Cúcuta, Ibagué, Pereira, Cali, Pasto, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales y Villavicencio (DNP, 2016). De los desempleados, cerca de 37 % tiene algún tipo de educación superior (universitaria, técnica o tecnológica), 55 % es bachiller y 8 % tiene primaria o un nivel educativo inferior (DNP, 2016).

2.4.1 Desempleo e informalidad

La situación de desempleo para los jóvenes (14 a 28 años) es aún más difícil, en la medida que 1 de cada 2 desempleados en Colombia es joven, lo cual implica una tasa de desempleo de 16 % para esta población (DNP, 2016). Para las mujeres jóvenes, la tasa alcanza un nivel de 21 % (Jaramillo, 2016; Trading Economics, 2014). Desde 2010 se han visto avances en la reducción del desempleo juvenil con una disminución de 20 %. A pesar de esto, los niveles actuales equivalen a más del doble del índice de desempleo total en Colombia y son superiores al promedio del desempleo juvenil de los países de la OCDE, que fue de 12 % en el 2014 (OCDE, Cepal y CAF, 2017).

De acuerdo con el Conpes 173 de 2014, que plantea lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes, la situación de desempleo juvenil es especialmente crítica para los que tienen edades entre 8 y 21 años. Adicionalmente, para quienes tienen educación superior la situación parece ser especialmente complicada frente aquellos con educación técnica: mientras 80 % de los universitarios consiguen un trabajo en el primer año después de graduarse, esta cifra es de 65 % para quienes terminan carreras tecnológicas y de 30 % para técnicos (ver el Conpes 173 de 2014).

Otra problemática considerable en la población joven es la tasa de informalidad, de acuerdo a la OCDE, Cepal y CAF (2017) para 2014, 48 % de los jóvenes que trabajaban en Colombia tenían un empleo informal. Esta cifra alcanzaba un nivel de 95 % y 83 % para los jóvenes que vivían en pobreza extrema y en pobreza respectivamente, frente a un 30 % para los jóvenes de clase media. Estas cifras han generado gran preocupación en el país y se les ha considerado una de las principales causas del problema fiscal, la mala distribución del ingreso y la baja cobertura de la seguridad social (Dinero, 2016).

2.4.2 Expectativas laborales, barreras de acceso y políticas públicas

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Dane realizaron un estudio sobre la población joven y su transición del proceso educativo al mercado laboral (Dane, 2016c). Uno de los temas centrales de este análisis es el de las aspiraciones laborales de los jóvenes. Los resultados del estudio indican que 58 % de los jóvenes en Colombia desean desempeñarse como profesionales o técnicos, 12,9 % como trabajadores de los servicios y 10,8 % como directivos.

En el mismo estudio los jóvenes afirman que las principales barreras que enfrentan para alcanzar sus aspiraciones son no contar con la experiencia laboral necesaria (40,8 % respondieron esto), por no cumplir los requisitos del trabajo que desean (16,8 %), o simplemente por falta de puestos de trabajo (14,3 %). Esto es coherente con resultados de otro estudio (Concordia, 2017) que revela que los jóvenes ven como principal obstáculo para su inserción en el mercado laboral la mala educación que recibieron, que les impide cumplir los requisitos y demandas de las empresas, y la falta de oportunidades, que los lleva incluso a aplicar a trabajos que no hacen parte de su campo de experticia.

Frente a las restricciones generadas por el no cumplimiento de los requisitos de los trabajos, alrededor de 50 % de las empresas en Colombia aseguran que efectivamente enfrentan grandes problemas encontrando trabajadores con habilidades adecuadas dadas sus necesidades (Manpower Group, 2015). Evidencia reciente sugiere que los empresarios colombianos, y en América Latina en general, demandan cada vez más una combinación de habilidades cognitivas, técnicas y socioemocionales, priorizando estas últimas (Bassi *et al.*, 2012). En Colombia, en particular, los empresarios demandan habilidades socioemocionales tales como compromiso, honestidad, confianza, motivación, liderazgo, iniciativa, autocontrol y habilidades de comunicación, entre otras (Flórez y Jayaram, 2016).

Sin embargo, evidencia cualitativa sugiere que algunos empresarios colombianos ven con preocupación que los jóvenes del país tienen un déficit importante en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Si bien consideran, en general, que la formación académica es adecuada, ven bajos niveles de tolerancia a la frustración (baja resiliencia), falta de autonomía y liderazgo, problemas en la comunicación interpersonal, bajos niveles de persistencia y baja autoeficacia, entre otros (Ritterbusch *et al.*, 2016). De igual forma, los mismos jóvenes afirman tener grandes problemas relacionados con falta de compromiso, habilidades de comunicación y presentación personal que les dificulta mantener un empleo (Abud *et al.*, 2015). Algunos empresarios del país consideran que las instituciones educativas son parcialmente culpables de esta problemática, al enfocarse en el desarrollo de habilidades cognitivas y no cultivar el desarrollo social y emocional de los jóvenes (Florez y Jayaram, 2016).

Fuera de políticas enfocadas al mejoramiento de la educación y del aprendizaje de los jóvenes, el gobierno ha adelantado diversos esfuerzos para la empleabilidad de esta población. Por ejemplo, en 2010 se aprobó la Ley 1429, llamada Ley de formalización y generación de empleo, la cual está dirigida a generar empleo formal para los jóvenes ofreciendo beneficios fiscales para las empresas que contraten individuos hasta de 28 años de edad. En el 2015, empezó el programa 40.000 primeros empleos, que busca fomentar la contratación de egresados de educación media o graduados de educación terciaria que no tengan experiencia laboral. Finalmente, en 2016 se aprobó la Ley 1780, la cual busca promover el trabajo de los jóvenes generando beneficios para emprendimientos, para empresas que contraten jóvenes y removiendo barreras de acceso tales como el requisito de la libreta militar.

2.5 Salud

2.5.1 Acceso a la salud y estado de salud

La Ley 100 de 1993 inició una reforma importante en el sistema de salud colombiano mediante la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Con esto, se establecieron dos regímenes de prestación de salud: el contributivo (financiado completamente por aportes de empleadores y empleados y que busca atender a toda la población de trabajadores formales no pobres y a sus familias), y el subsidiado (que busca atender a la población más vulnerable)⁸. Adicionalmente se establecieron los planes de atención complementaria para la población con capacidad de pago adicional. Si bien inicialmente se esperaba cubrir 70 % de la población mediante régimen contributivo y el restante con subsidiado, en la actualidad solo 40 % está afiliado al contributivo y 44 % al subsidiado, lo cual impone una dificultad importante para el sistema (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a). A pesar de esto, hubo un incremento de más de 5 puntos porcentuales en el porcentaje de personas afiliadas al régimen contributivo entre 2010 y 2015.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a), las tasas de afiliación para toda la población son favorables para las mujeres, donde tan solo 4,6 % de ellas no están afiliadas, mientras esta cifra alcanza 6,4 % para los hombres. Adicionalmente, existe un gradiente considerable por riqueza: mientras 80,7 % de las personas en

⁸ Existen también regímenes especiales para los docentes del sector público, los militares y trabajadores de Ecopetrol.

el quintil superior de riqueza están afiliados al régimen contributivo, esta cifra alcanza 8,4 % para quienes se encuentran en el quintil inferior (para régimen subsidiado ocurre un comportamiento contrario). También hay diferencias considerables por nivel educativo: mientras 33 % de quienes tienen primaria o un nivel educativo menor pertenecen al régimen contributivo, 46,8 % de quienes tienen secundaria y 72,3 % con educación superior pertenecen al mismo régimen. También existe una diferencia por zona, donde 54,8 % de las personas en zonas urbanas pertenecen al régimen contributivo y 76,3 % en zona rural al subsidiado. No obstante, el porcentaje de personas sin ningún tipo de afiliación es similar en ambas zonas (5,3 % para urbano y 5,9 % en rural). Por último, hay diferencias departamentales considerables, donde regiones como La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Chocó tienen más de 8 % de su población sin ningún tipo de afiliación, mientras en Boyacá, Risaralda, Caquetá, Nariño, Guaviare y Putumayo el porcentaje es inferior a 4 %.

La tabla 3 presenta una descripción de las tasas de afiliación al SGSSS por rangos de edad. Es importante notar que 8,9 % de jóvenes con edades entre 20 y 29 años no tienen ningún tipo de afiliación, siendo el rango de edades con mayor tasa de desprotección. Por otra parte, el porcentaje de jóvenes afiliados al régimen contributivo es sustancialmente menor al de la población adulta.

Tabla 3. Afiliación al SGSSS por rangos de edad

Grupo de edad	Régimen			No está afiliado	No sabe
	Contributivo	Subsidiado	Otro		
0-9	39,5	52,1	2,9	5,0	0,4
10-19	39,1	52,9	2,8	4,9	0,4
20-29	46,0	42,4	1,8	8,9	0,9
30-39	52,9	37,9	2,7	5,9	0,6
40-49	50,3	41,1	2,7	5,4	0,5
50-59	50,4	40,8	4,1	4,2	0,4
60-69	50,8	41,8	4,2	3,0	0,2
70-79	46,5	47,5	3,8	1,8	0,3
80-89	46,0	48,3	3,4	2,2	0,2
90+	46,2	48,7	3,0	2,0	0,1
Total 2015	45,9	45,3	2,9	5,5	0,5
Total 2010	40,4	44,2	2,6	12,1	0,6

Fuente: Ministerio de Salud y Profamilia (2016a)

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 cuenta, adicionalmente, con información sobre problemas de salud el mes anterior a la encuesta, las acciones tomadas para contrarrestar el

problema, la percepción de salud de las personas y sobre discapacidades. En primer lugar, 9 % de los colombianos afirmaron haber tenido problemas de salud el mes anterior a la encuesta. De estos, 64,6 % acudió a una consulta médica (57,4 % en zonas rurales y 66,5 % en urbanas); 13,9% se automedicó; 10 % acudió a un remedio casero; 8,5 % acudió a una farmacia; y 2,5 % no hizo nada. El porcentaje de personas que acudió a un centro médico tiene una tendencia creciente a medida que se avanza en quintiles de riqueza. Dentro de las principales razones expresadas para no acudir a un centro médico se encuentran razones personales (39,1 %), se culpa a los servicios de salud (35,8 %), se encuentran razones económicas (6,3 %), entre otras.

Por otra parte, la tabla 4 presenta la percepción de los colombianos en diferentes rangos de edad, por sexo, sobre su estado de salud. En general, para los jóvenes se observa que una mayor proporción de hombres que de mujeres afirma tener un estado de salud excelente. Adicionalmente, 12,3 %, 14 % y 17,6 % de mujeres con edades entre 15-19, 20-24 y 25-29, respectivamente, afirman tener un estado de salud malo o regular, mientras para los hombres estas cifras son 8,7 %, 10,1 % y 10,6 %, respectivamente. Por último, hay un gradiente considerable por características socioeconómicas, donde individuos pertenecientes a los quintiles de riqueza más alto tienen una mejor percepción de salud que aquellos con una menor riqueza (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a).

Tabla 4. Percepción del estado de salud

Grupo de edad	Mujeres					Hombres				
	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo
13-14	22,2	12,9	55,1	9,7	0,2	21,0	15,7	54,6	8,5	0,2
15-19	19,0	13,8	54,9	11,9	0,4	23,3	14,1	53,8	8,5	0,2
20-24	16,5	13,3	56,2	13,0	1,0	26,6	14,6	48,6	9,7	0,4
25-29	17,2	12,0	53,1	16,3	1,3	22,6	16,7	50,1	10,3	0,3
30-34	14,6	12,8	55,1	17,1	0,5	21,5	12,1	53,1	12,6	0,7
35-39	12,9	9,7	55,7	20,6	1,1	20,1	12,6	51,0	15,6	0,7
40-44	9,9	10,1	50,6	27,9	1,5	17,0	10,5	52,9	18,2	1,4
45-49	7,2	8,7	51,2	30,4	2,6	12,8	10,9	52,7	22,1	1,4

Fuente: Ministerio de Salud y Profamilia (2016a)

En cuanto a discapacidades, 5,4 % de la población entre 20 y 29 afirma tener alguna discapacidad relacionada con la escucha, con hablar o conversar, ver, agarrar objetos o moverse, entender, recordar o tomar decisiones, comer, vestirse o bañarse, relacionarse con otros o hacer tareas diarias en general (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a). Adicionalmente, en este rango de edad se

concentra la mayor proporción de personas que afirman tener dificultades en la vida diaria para relacionarse o interactuar con los demás.

Otra fuente importante de información sobre salud en los jóvenes de Colombia es la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. La encuesta de 2010 revela que 13,2 % de personas entre 10 y 17 años tiene sobrepeso, mientras 3,4 % entre 10 y 17 años tiene obesidad. Para la población de 18 a 64, 51,2 % sufre de sobrepeso. Existen diferencias departamentales considerables en estos indicadores, donde hay una mayor prevalencia de sobrepeso en San Andrés y Providencia, Guaviare, Guainía, Caquetá, Vichada y Casanare, y menor prevalencia en Bogotá, Santander, Quindío y Atlántico. Estos niveles pueden relacionarse con que tan solo 25 % de los adultos en el país hace actividad física en el tiempo libre, dos de cada tres consume frutas, uno de cada tres verduras y uno de cada cinco consume gaseosas, refrescos, dulces y golosinas diariamente.

Para finalizar, el consumo de sustancias ilegales, de tabaco y de alcohol ha tenido un crecimiento importante en los últimos años (Camacho *et al.*, 2010). En promedio, el consumo de sustancias ilegales inicia a los doce años y hay una prevalencia de consumo de sustancias de 2,7 %, siendo de 5,4 % para hombres y 1,2 % para mujeres (Romero *et al.*, 2015). En general, la población joven de dieciocho a veinticuatro años es la más propensa a consumir alcohol, tabaco y sustancias ilegales frente a otros grupos de edades en Colombia (Camacho *et al.*, 2010; Romero *et al.*, 2015).

2.5.2 Salud sexual y reproductiva

La reducción en la fertilidad discutida en la sección de demografía se ha presentado en todos los rangos de edad, particularmente para los jóvenes (14 a 28 años). La tabla 5 presenta la tasa de fecundidad (número de nacimientos por 1.000 mujeres) por rangos de edad para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2015. Durante este periodo, la tasa de fecundidad pasó de 85 a 75 nacimientos para jóvenes entre 15 y 19 años, de 142 a 112 nacimientos para jóvenes entre 20 y 24 años y de 129 a 92 nacimientos para jóvenes entre 25 y 29 años.

Tabla 5. Tasas de fecundidad por rango de edad, 2000-2015

Grupo de edad	2000	2005	2010	2015
15-19	85	90	84	75
20-24	142	132	122	112
25-29	129	116	100	92
30-34	99	77	70	68
35-39	49	46	38	38
40-44	15	15	12	9
45-49	2	2	2	1
Tasa global	2,6	2,4	2,1	2,0

Fuente: Ministerio de Salud y Profamilia (2016a)

Los resultados de la Encuesta de Demografía y Salud 2015 revelan que para la población general en la tasa de fecundidad en zonas rurales es de 2,6, mientras en urbano es 1,8. La tasa global también presenta un gradiente por educación, siendo de 3,9 para aquellas mujeres con educación primaria, 3,0 con secundaria y 2,1 para quienes cuentan con educación superior. El gradiente también se observa por riqueza: para el primer quintil (más pobre) es 2,8, el segundo es de 2,3, el tercero es 1,9, el cuarto es 1,5 y el último (más rico) es 1,3.

Por otra parte, la edad promedio del nacimiento del primer hijo es 21,7, cifra que ha sido estable desde 2005 y que es mayor en zona urbana (22,2) que en rural (20). Adicionalmente, 19,5 % de las madres tuvieron su primer hijo antes de cumplir 20 años y, al mirar edades individuales, 1,4 % de las mujeres de 15 años, 5,6 % de 16 años, 13 % de 17, 22,3 % de 18 y 27 % de 19 años ya son madres (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a). Frente al embarazo, 1,6 % con 15 años, 3 % con 16; 4 % con 17; 4,3 % con 18; y 6 % con 19 años están embarazadas (siendo mayor el porcentaje para todas las edades en zonas rurales). Los hallazgos de la Encuesta de Demografía y Salud, además, revelan que tanto el embarazo como el tener hijos antes de los 20 años se asocian con menores años de educación y menor riqueza, al igual que con menor supervisión parental y es más probable para quienes perciben que sus amigos o amigas ya iniciaron su vida sexual y para quienes creen que sus amigos o amigas sexualmente activos no usan condón.

Frente a la anticoncepción: ha habido un incremento muy importante en el uso de métodos anticonceptivos, pasando de 42,5 % en 1976 a 79,1 % en 2010. En la actualidad, 99,9 % de los jóvenes afirma conocer por lo menos un método anticonceptivo (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016b). Esto ha sido, en parte, resultado de un incremento importante en la educación sexual,

donde alrededor de 95 % de personas ha recibido alguna vez información sobre asuntos relacionados con salud sexual: este porcentaje es superior para personas con mayor nivel educativo y mayor riqueza. Más de la mitad de los colombianos reciben información sobre anticoncepción en instituciones educativas, seguido por instituciones de salud y finalmente en la familia. A pesar de estos avances, aún 40 % de los jóvenes afirma que le ha hecho falta contar con más información sobre sexualidad en algún momento de su vida (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016b).

2.6 Conflicto y crimen

2.6.1 Conflicto armado

Colombia ha sufrido durante más de medio siglo las devastadoras consecuencias de uno de los conflictos armados más largos e intensos del mundo (Echeverry *et al.*, 2001). El contexto de la violencia colombiana resulta complejo, al involucrar múltiples actores: guerrilla, autodefensas, fuerzas del Estado, bandas criminales y narcotraficantes. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RNI, 2017), entre 1985 hasta abril de 2017 hay 8'100.180 víctimas registradas, lo cual implica que más de 15 % de los colombianos han sido víctimas en el marco del conflicto. De estas, 7'159.144 han sido víctimas de desplazamiento, 985.394 de homicidio, 334.100 de amenazas, 94.839 de actos terroristas, atentados u hostigamientos, 34.951 de secuestro, 4.920 de despojo forzado de tierra, 10.990 de minas antipersonales, 19.411 de delitos contra la libertad e integridad sexual, y 10.279 de tortura.

La tabla 6 presenta el número de hechos por rangos de edad de acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas. Es posible ver que cerca de 16 % de los hechos le ocurrieron a población menor de 12 años, un poco más de 30 % a población joven y 44 % a población mayor de 18 años (para el restante no hay información sobre edad). Para los jóvenes, los hechos victimizantes más comunes fueron el desplazamiento forzado, homicidios, amenazas, desaparición forzada y ser víctima de un acto terrorista, atentado, combate u hostigamiento.

Tabla 6. Hecho victimizante por rango de edad (1985-2017)

Hecho	0-5	6-11	12-17	18-28	29-60	61-100	N/S
Homicidio	3,316	9,965	26,419	100,183	437,316	132,833	275,362
Abandono o despojo forzado de tierras	7	50	142	633	2,122	779	1,187
Pérdida de bienes muebles o inmuebles	75	152	195	5,298	59,358	22,769	22,351
Sin información				5	24	1	16
Secuestro	60	173	380	2,191	21,007	5,532	5,608
Desaparición forzada	683	1,412	4,984	18,773	79,795	24,158	36,787
Tortura	26	86	182	927	5,97	1,184	1,904
Delitos contra la libertad y la integridad sexual	155	376	683	3,98	13,241	628	348
Vinculación de niños, niñas y adolescentes	15	36	234	365	2,836	143	1,241
Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos	1,441	3,991	5,057	13,531	49,977	12,83	8,012
Amenaza	14,209	30,732	34,844	71,959	156,495	31,335	4,526
Minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo	37	189	269	1,253	6,115	444	2,683
Desplazamiento	492,982	865,594	1,025,890	1,610,379	2,365,133	547,155	252,011
Total	513,006	912,756	1,099,279	1,825,895	3,194,016	768,244	612,036

Fuente: RNI (2017), Registro Único de Víctimas

Por otra parte, los adolescentes y jóvenes del país también han sido víctimas del reclutamiento en grupos armados, incluso siendo menores de edad, lo cual ha hecho que crezcan en medio de la guerra. De acuerdo con Springer (2012), 50,14 % de los combatientes adultos de las Farc ingresaron a dicho grupo siendo menores de edad, cifra que pasa a ser de 52,3 % para el ELN y 38,12 % para las AUC. La misma investigación afirma que para 2012 aproximadamente cuatro de cada diez miembros de las Farc eran niños, niñas o adolescentes, cifra que pasa a ser de 44 % para el ELN. El reclutamiento de adolescentes y jóvenes, aunque en algunos casos es forzado, se da mayoritariamente utilizando estrategias persuasivas, sacando ventaja de la condición de vulnerabilidad que pueden vivir en las zonas desfavorecidas del país (González, 2016; Springer, 2012).

Una de las formas de violencia más desgarradoras en el marco del conflicto, que golpeó particularmente a la población joven, se expresó en los llamados “falsos positivos”. Uno de los casos que más impactó a la sociedad fue el asesinato de 23 jóvenes entre 17 y 32 años de zonas marginadas de Bogotá y sus alrededores (municipio de Soacha específicamente) que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combates en Norte de Santander (Grupo Nacional de Memoria Histórica, 2013). Después de investigaciones, se descubrió que estos jóvenes eran mayoritariamente desempleados o trabajaban en construcción o mecánica, incluso, uno de ellos

tenían una discapacidad cognitiva (Grupo Nacional de Memoria Histórica, 2013). Se estima que desde 1985 han ocurrido cerca de 1.741 casos de ejecuciones extrajudiciales en el país (Romero *et al.*, 2015).

Los jóvenes son una población que ha sido especialmente golpeada por la guerra, al ver morir a familiares y conocidos, creciendo en los grupos armados o huyendo de zonas de conflicto y perdiendo oportunidades que les arrebató la violencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). De hecho, el conflicto ha generado costos económicos, sociales, culturales y psicológicos que sitúan a la población víctima en condiciones especialmente desfavorables en el corto y mediano plazo.

2.6.2 Crimen

Si bien el conflicto armado ha golpeado principalmente las zonas rurales de Colombia (McGill, 2015), los crímenes asociados a la guerra han tenido reducciones considerables, por ejemplo, pasando de tener 70 homicidios por 100.000 habitantes hace aproximadamente quince años a tener 32 en el 2013, y reduciendo secuestros y atentados en 87 % y 41 %, respectivamente. No obstante, este mejoramiento ha habido un crecimiento preocupante de crímenes asociados a fenómenos más urbanos, como, por ejemplo, el hurto a personas, residencias y comercio, y las lesiones personales (Mejía, 2014). Respecto a esto, el Barómetro de las Américas revela que cerca de 40 % de los colombianos afirma sentirse inseguro o muy inseguro en su barrio, casi 45 % cree que el nivel de violencia en su barrio es mayor que hace 12 meses, 39 % afirma haber evitado ciertas zonas de sus barrios por miedo y 20 % ha sido víctima de delincuencia. Esta situación es más aguda en la población joven: 23,7 % de la población entre 18 y 28 años (García Sánchez *et al.*, 2015).

En el país los principales grupos relacionados con la violencia juvenil son las barras violentas de fútbol, bandas criminales, pandillas, oficinas de cobro, grupos al servicio del narcotráfico y vigilancia comunitaria (CERAC, 2014). En particular con la expansión del microtráfico en zonas urbanas desde 2009 se ha presentado un incremento en la actividad de pandillas juveniles, teniendo como principales actividades el hurto a personas y venta de drogas (Ávila, 2014). Sin embargo, hay un alto nivel de conflictividad entre pandillas (principalmente por control territorial), que va acompañado del establecimiento de fronteras invisibles en los barrios que imponen límites y

restringen el funcionamiento de las comunidades (Ramos, 2003). Si bien no se conoce el número exacto de pandillas en el país, y el número varía según fuente, *Semana* (2016) señala que Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín tienen las peores cifras, con 109, 149, 105 y 90 pandillas, respectivamente. Adicionalmente, la misma fuente muestra que estos grupos están compuestos mayoritariamente por hombres con edades que oscilan entre los 9 y 28 años.

En general, el crimen juvenil y las pandillas se concentran en las zonas marginadas y desfavorecidas de los centros urbanos (CERAC, 2014). Dentro de las causas de la delincuencia en jóvenes se encuentra la pobreza, falta de oportunidades, desigualdad y baja escolarización (Sánchez, 2007; *Semana*, 2016). De igual forma, la exposición a violencia intrafamiliar, en particular durante la infancia, el uso de drogas y, en menor medida la exposición a violencia en la televisión, son factores asociados a la violencia y delincuencia juvenil (Brook *et al.*, 2003; Llorente, Chaux y Salas, 2005; *Semana*, 2016).

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el incremento en la violencia juvenil ha ido acompañado por un incremento muy importante en el número de jóvenes (14 a 28 años) privados de la libertad, alcanzando en 2017 un total de 63.052. De igual forma, los reportes de Medicina Legal indican que los casos de violencia interpersonal entre jóvenes pasaron a ser de 49,421 en 2011 a 64,011 en 2014, un incremento que se dio, principalmente, en zonas urbanas. No obstante, en los últimos años se ha presentado una reducción considerable en los casos de homicidios y violencia intrafamiliar (para jóvenes), pasando de 7.590 y 39.355 casos reportados en el 2010 a 5.031 y 29.029 en 2015, respectivamente.

El Gobierno ha buscado responder al crecimiento del crimen urbano con diferentes programas de seguridad. La evidencia sugiere que los programas, algunos enfocados directamente en reducir el crimen y otros por externalidades, tales como la restricción de venta de alcohol, el instalar cámaras de vigilancia e incluso el programa Familias en Acción, efectivamente han tenido efectos importantes sobre la reducción del crimen urbano en los últimos años (Camacho y Mejía, 2012; De Mello *et al.*, 2013; Gómez, *et al.*, 2017).

2.6.3 Consecuencias de la exposición a la violencia

La exposición al conflicto armado ha generado múltiples consecuencias negativas sobre las víctimas. Por ejemplo, la población víctima de desplazamiento forzado experimenta tasas de pobreza extrema superiores a 75 % (Ibáñez, 2008), al igual que niveles de desempleo relativamente más altos que las de hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza e incluso de pobreza extrema (Ibáñez y Moya, 2007). Estas condiciones han generado caídas cercanas a 50 % en los ingresos laborales y de más de 30 % en el consumo de esta población con relación a los niveles que experimentaban antes del desplazamiento (Ibáñez y Moya, 2010a). Este panorama resulta aún más preocupante considerando que esta población difícilmente logra recuperar sus niveles de bienestar iniciales (Ibáñez y Moya, 2010b). Gran parte de estos efectos se explican porque con el hecho, las víctimas experimentan una pérdida sustancial en sus activos físicos, sociales (redes y contactos) y psicológicos, al igual que una depreciación de su capital humano (ya que sus habilidades y conocimiento agrícolas no son utilizables en contextos urbanos) y niveles importantes de discriminación en las ciudades donde llegan, lo cual dificulta que puedan desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral y superar su situación de pobreza.

Fuera de la victimización directa, estar expuesto a ambientes violentos, ya sea en el barrio en zonas urbanas o vereda en zonas rurales e incluso en el municipio, se asocia con una reducción en años de escolaridad y entrada a actividades productivas con menos contenido de capital humano (Fergusson *et al.*, 2015), mayor probabilidad de deserción del sistema educativo (Rodríguez y Sánchez, 2012), menor desempeño en las pruebas estandarizadas Saber (Cristancho *et al.*, 2016) y menor desarrollo de habilidades sociales y emocionales (Molano *et al.*, 2016).

2.7 Salud mental y emocional

En los últimos años, diversos sectores en Colombia han tenido una creciente preocupación relacionada con la salud mental de los jóvenes en el país. Por ejemplo, en prensa han aparecido titulares como “Salud mental en Colombia está en sala de urgencias” (*El Colombiano*, febrero 8 de 2015), “La depresión afecta cada vez más a los jóvenes en Colombia” (RCN Radio, abril 18 de 2017) y “Males mentales se ensañan con adolescentes y mujeres” (*El Tiempo*, 20 de septiembre de 2015).

Estas preocupaciones no resultan infundadas, en la medida que evidencia empírica señala que niveles elevados de pobreza, desigualdad y, particularmente, de exposición a eventos traumáticos y a la violencia pueden desencadenar afecciones psicológicas y emocionales que comprometen el bienestar y las oportunidades de las personas (Haushofer *et al.*, 2015; Haushofer y Fehr, 2014; World Health Organization, 2002; Pham *et al.*, 2004).

2.7 Salud mental general e inequidades

Datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 (Ministerio de Salud y Colciencias, 2016) revelan que 29,3 % de los adolescentes del país han estado expuestos a por lo menos una experiencia traumática, siendo este porcentaje mayor en Bogotá y las regiones Pacífica y Central. De estos jóvenes, 88,1 % considera que el evento le ha generado un trauma psicológico, que se expresa en recuerdos intrusivos, evitar pensar o hablar sobre la experiencia, y menores niveles de concentración. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial para la Salud (Torres *et al.*, 2010), entre estos hechos se encuentran rupturas en relaciones, desilusiones importantes, muerte de un familiar o amigo, o una crisis económica grave. Para población mayor (entre 18 y 44 años), 12,5 % afirma haber estado expuesto a más de un evento traumático, usualmente relacionado con exposición a violencia por delincuencia común, al conflicto armado o la violencia intrafamiliar. Cuatro de cada diez adultos afirma que esto le generó un trauma.

Estos eventos estresantes se manifiestan en niveles considerables de sufrimiento emocional y trastornos psicológicos. Alrededor de 7,2 % de los adolescentes en Colombia ha sufrido algún trastorno en su vida, hay una prevalencia de 6,6 % en cuanto a ideación suicida, 11,6 % de los adolescentes tiene tres o cuatro síntomas de trastornos de ansiedad y 15,8 % tiene de cuatro a seis síntomas de depresión (Gómez-Restrepo *et al.*, 2016a; Ministerio de Salud y Colciencias, 2016). Los trastornos más comunes para la población joven son los relacionados con ansiedad, depresión, fobia social y consumo de sustancias (Gómez-Restrepo *et al.*, 2016a; Agudelo *et al.*, 2008). En general, estos y otros problemas psicológicos son más prevalentes en mujeres: que por cada hombre con trastornos de ansiedad o desórdenes afectivos hay alrededor de dos mujeres (Torres *et al.*, 2010). Por otra parte, los principales factores asociados a estos trastornos son contar con poco apoyo familiar, vivir en situación de pobreza y vivir algún evento traumático, especialmente

relacionado con violencia y el conflicto armado (Gómez-Restrepo *et al.*, 2016a; Torres *et al.*, 2010; Quitian *et al.*, 2016).

2.7.2 Las heridas invisibles de la violencia y del conflicto armado en Colombia

Con más de cincuenta años de conflicto armado, siendo el segundo país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo y contando con niveles de violencia en zonas urbanas con proporciones de epidemia (World Bank, 2016), los jóvenes de Colombia ha estado expuestos a eventos traumáticos a lo largo de sus vidas, que fuera de tener consecuencias materiales y sociales, genera profundas heridas psicológicas.

Las víctimas del conflicto armado afirman haber vivido hechos como presenciar el asesinato de padres, hijos y otros familiares, destrucción de sus hogares y cosechas, e, incluso para los niños y adolescentes, escuchar a sus madres suplicar mientras eran víctimas de violencia sexual (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Estos eventos se traducen en que la población víctima, al igual que quienes viven en zonas con mayor intensidad del conflicto armado, cuentan con mayores prevalencias de trastornos mentales (Gómez-Restrepo *et al.*, 2016b; Tamayo *et al.*, 2016). Estos trastornos, al igual que sentimientos de profunda desesperanza, tristeza, alteraciones del sueño, pesadillas, miedo constante y dificultades para relacionarse con otras personas son especialmente importantes para población víctima del desplazamiento forzado (Alejo *et al.*, 2010; Londoño *et al.*, 2005; Médicos sin Fronteras, 2006, 2010; Moya y Carter, 2014; Pérez-Olmos *et al.*, 2005).

2.7.3 Violencia, conflicto armado y salud mental en la adolescencia

El conflicto puede tener consecuencias especialmente severas para la población adolescente, que ha crecido en medio de la violencia y de choques repentinos que comprometen su bienestar y el de sus familias. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de Unicef y del Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) con una muestra de adolescentes víctimas del conflicto y no víctimas, encuentra una gran prevalencia de estados emocionales adversos para los adolescentes desvinculados, desplazados, víctimas de violencia sexual y víctimas de minas antipersona (OIM, Unicef e ICBF, 2013).

El estudio de la OIM, Unicef e ICBF encuentra que los adolescentes víctimas del conflicto armado tienen manifestaciones de tristeza, decaimiento emocional, alteración en respuesta afectiva, problemas sociales, preocupaciones exageradas al pensar en la muerte o la enfermedad, problemas de autoestima y depresión. Estos problemas se agravan en la medida que los principales cuidadores de estos jóvenes, que son su única fuente de protección, podrían o bien no estar presentes por las mismas dinámicas del conflicto y la violencia o no tener la capacidad de brindar un cuidado adecuado al vivir en ambientes tan adversos (Cuartas, 2017; Cuartas *et al.*, 2016).

2.7.4 Salud mental y movilidad social

¿Estas afecciones psicológicas y estados emocionales adversos, fuera de ser importantes por sí mismas al generar sufrimiento y disminución en el bienestar, podrían dificultar a los jóvenes desempeñarse adecuadamente en la sociedad e, incluso, atraparlos en la pobreza? Evidencia internacional y de Colombia sugiere que sí.

Por ejemplo, para Colombia, un estudio de Reali *et al.* (2016), utilizando los resultados de PISA 2015, muestra una asociación importante entre los niveles de ansiedad de los jóvenes con su desempeño en la prueba. Por otra parte, Moya (2016) y Moya y Carter (2014) muestran que el trauma generado por el desplazamiento en zonas de conflicto en el país desencadena actitudes y preferencias que podrían dificultar a los individuos recuperar los niveles socioeconómicos que tenían previamente al hecho victimizante, al igual que estados de pesimismo y desesperanza elevados. Al respecto, Cuartas y Moya (2016) encuentran una asociación importante entre las expectativas que tienen individuos en zonas de conflicto frente a sus perspectivas de movilidad social con su movilidad observada en el mismo periodo de tiempo, aún al controlar por sus niveles de riqueza y otras características socioeconómicas. Si bien esta evidencia no es causal, si sugiere que fuera de las barreras materiales que enfrentan las víctimas, al perder sus activos e ingresos, también deben cargar con un peso psicológico adicional que hace su situación aún más difícil. Futura investigación podría explorar si esta relación se da por impactos en la agencia de los individuos o cuáles son los mecanismos precisos que la explican.

2.8 Participación, preferencias políticas y confianza

La preocupación por la baja participación política de los jóvenes y los cuestionamientos sobre su apatía frente a la política es un tema de discusión desde hace bastantes años en el país (*El Colombiano*, 2008; *El Tiempo*, 2009). Esto ocurre en un contexto en el cual los jóvenes pueden ejercer su derecho a votar desde los 18 años y, donde, desde la Constitución Política de 1991 y la Ley de Juventud (1622 de 2013) se ha abierto un marco legal garantizando y protegiendo los derechos de la población relacionados con participación política. No obstante, en la prensa constantemente se cataloga a este segmento poblacional como el principal promotor y garante de la paz en Colombia, lo cual resulta de cierta forma paradójico con lo mencionado anteriormente. La apatía de los jóvenes y su baja participación no son hechos aislados: la población colombiana tiene enormes problemas de desconfianza en el sistema político, en las instituciones y, en general, en las demás personas.

2.8.1 Preferencias políticas y participación política y en grupos

Los resultados de los Barómetros de las Américas más recientes (García *et al.*, 2015) dan cuenta de cambios importantes en las preferencias y percepciones políticas de los colombianos. Por ejemplo, en 2014 menos de 50 % de los colombianos apoyaban el sistema político del país, frente a niveles superiores a 60 % entre 2008 y 2010. El apoyo a los derechos políticos de todos los ciudadanos en una escala de 0 a 100 ha pasado de 50,3 en 2003 a 46,9 en 2014, siendo superior en los jóvenes (50) que en adultos (44) y adultos mayores (39), lo cual muestra una mayor tolerancia política en la población joven del país (García y Rodríguez, 2016). Por otra parte, el porcentaje de personas satisfechas con la democracia en el país cayó de 57,7 % en 2004 a 35,8 % en 2014. La aprobación de la gestión presidencial también cayó a niveles inferiores a 50 %, después de alcanzar 70 % en 2004, y siendo mayor en adultos mayores (39,3 %) que en jóvenes (22 %) (García y Rodríguez, 2016).

En cuanto a preferencias políticas, 14,9 % de los jóvenes afirma ser de derecha, frente a 23,6 % de adultos y 41,6 % de adultos mayores (García-Sánchez y Rodríguez, 2016). Esto se refleja en que, en general, los jóvenes tienen posturas menos conservadoras frente a temas relacionados con la homosexualidad (40 % de jóvenes aprueba la homosexualidad frente a 28 % de adultos y 12 % de adultos mayores), divorcio, eutanasia, la legalización de la marihuana y el uso de anticonceptivos

que la población adulta. Frente a otras percepciones de los jóvenes, los resultados del Barómetro de las Américas revelan que 24,6 % de los jóvenes afirma que la economía es el principal problema del país (frente a 31,6 % de adultos); solo 12,9 % de los jóvenes cree que la situación nacional está mejor en los últimos años y 34 % lo cree de su situación personal. Entre los adultos 31,6 % cree que la situación nacional está mejor y 30 % lo cree para la situación personal. Por último, 73 % de los jóvenes cree que el Estado debe emplear políticas para reducir la desigualdad, frente a 66 % de adultos mayores que afirma lo mismo.

Una problemática especialmente preocupante en Colombia es la baja participación política, particularmente de los jóvenes. En las elecciones presidenciales de 2014 la abstención fue cercana a 60 %, siendo igual para jóvenes que para mayores (Romero *et al.*, 2015). De acuerdo con Romero *et al.* (2015), una de las razones que puede explicar esta baja participación en la población joven es que 26 % de personas entre 18 y 25 años no conocen los mecanismos que existen para participación ciudadana. Por otra parte, de acuerdo con los jóvenes sus bajos niveles de participación se explican por desconfianza en el proceso electoral, por no sentirse identificados con ningún partido político, por problemas con su documento de identidad que les impide votar o por no conocer a los candidatos (Romero *et al.*, 2015).

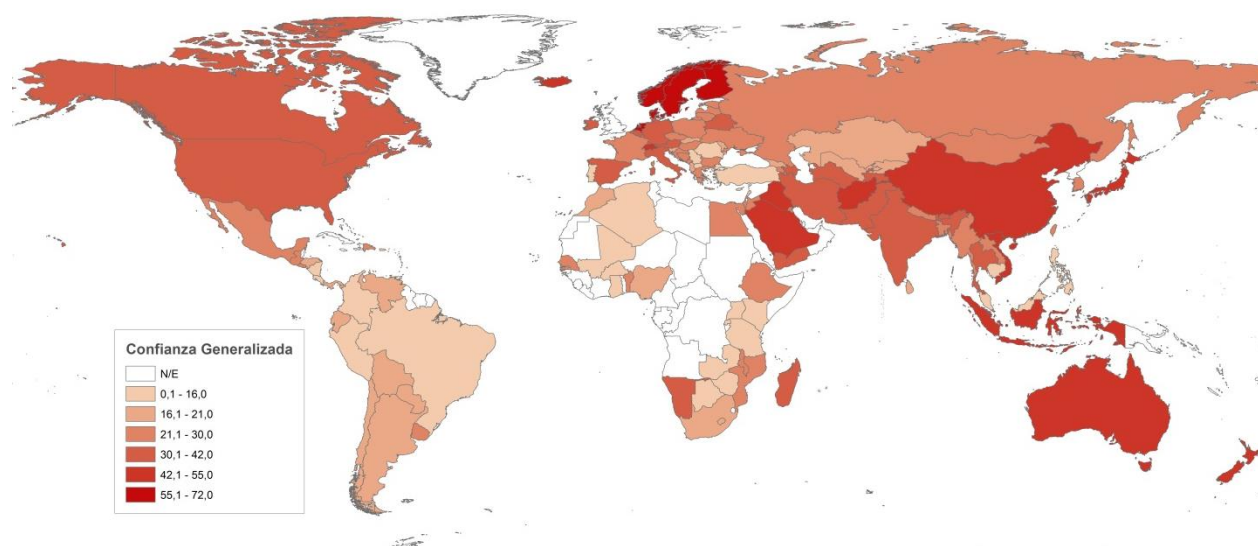
Frente a participación en grupos, en general los colombianos participan mayoritariamente en grupos religiosos (56,3 %), seguido de grupos de padres de familia (44 %); sin embargo, la participación en grupos relacionados con mejoras a la comunidad o movimiento políticos es inferiores a 30 % (García *et al.*, 2015). En general, los niveles de participación para los jóvenes son muy inferiores al de adultos y adultos mayores, alcanzando niveles de 19,4 % (Romero *et al.*, 2015).

2.8.2 (Des)confianza y corrupción

La baja participación política y en grupo sociales se relaciona con los bajos niveles de confianza que tienen los colombianos en las instituciones, el sistema y en otras personas. En una muestra de 130 países desarrollados y en desarrollo de los cinco continentes, Colombia está entre los países con menores niveles de confianza en el mundo (figura 6): solo 13,9 % de los colombianos afirma confiar en los demás, mientras países nórdicos tienen niveles superiores a 60 % y otros países de

la región como Argentina, Chile y Uruguay tienen niveles superiores a 15 % (Cuartas, 2016). Utilizando esta muestra de países, Cuartas (2016) muestra que, después de controlar por características demográficas y socioeconómicas, al igual que por heterogeneidad no observada fija en el tiempo, la desigualdad económica es uno de los principales causantes de los bajos niveles de confianza en el país.

Figura 6. Porcentaje de personas que confían en los demás



Fuente: Cuartas (2018). Realizado con los datos de la World Values Survey

Frente a la confianza en las instituciones y el sistema político, tan solo 21 % de los jóvenes en el país confía en la transparencia de los resultados electorales, siendo inferior a la proporción de adultos y a los niveles de América Latina, que son cercanos a 36 % (OCDE, CAF y CEPAL, 2017). El Barómetro de las Américas revela que la institución en la cual más confían los colombianos es la iglesia católica (63,1 %), seguida por las fuerzas armadas (54,6 %), las iglesias cristianas evangélicas (51,5 %), el Gobierno nacional (50,1 %), la policía (48,2 %), la alcaldía (41,5 %), el Congreso (40,8 %), los sindicatos (37,7 %) y, por último, los partidos políticos (29,7 %). Los niveles de confianza en todas las instituciones han tenido una caída paulatina desde 2004 (García *et al.*, 2015). Adicionalmente, existe una asociación entre la desconfianza ciudadana y la incidencia del narcotráfico (García, 2014).

Por último, la percepción de corrupción ha aumentado considerablemente. En la actualidad, Colombia ocupa el segundo lugar de percepción de corrupción ciudadana en los países de las Américas, siendo superada solamente por Venezuela (García *et al.*, 2015). Para 2014, más de la mitad de los colombianos afirmaron que la corrupción en funcionarios públicos está muy generalizada y 13,1 % afirmó haber sido víctima de la corrupción en algún momento, siendo un 15,7 % para la población joven (García y Rodríguez, 2016). A pesar de esto, aún 12,3 % de los colombianos cree que la corrupción, en algún grado, resulta ser justificable (García *et al.*, 2015).

2.8.3 Proceso de paz y posconflicto

Después de medio siglo de guerra, Colombia inició (oficialmente) en agosto de 2012 un proceso de negociación para alcanzar la paz con la guerrilla de las Farc. Pasados casi 4 años, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto, el cual incluyó puntos relacionados con una política de desarrollo agrario, participación política de las Farc una vez dejara las armas, el fin del conflicto, la solución al narcotráfico, la reparación a las víctimas y los mecanismos para refrendar los acuerdos. Este acuerdo, adicionalmente, dejaba en manos de los colombianos su refrendación mediante un plebiscito que, con un empate técnico, dio como ganador final al *No*. Esto a pesar de que históricamente más de la mitad de los colombianos han creído que la mejor solución al conflicto es una salida negociada, especialmente en zonas del conflicto donde 77 % apoya esta solución (García *et al.*, 2015).

Los resultados del plebiscito, si bien sorprendentes para gran parte de los colombianos e internacionalmente, son fruto de enormes niveles de desconfianza y pesimismo frente a la posibilidad de una reconciliación verdadera. De acuerdo al Barómetro de las Américas, tan sólo 51,2 % de los jóvenes, considerados los abanderados de la paz en el país, apoyaban el proceso de paz, frente a 54,9 % de adultos mayores de 60. Adicionalmente, en 2014 tan solo 24,2 % de los colombianos veían posible o muy posible una salida negociada con las Farc y 29 % veían posible o muy posible la desmovilización de esta guerrilla. Tan solo 15,6 % de los jóvenes estaría de acuerdo con que las Farc participaran en política (en comparación con 20 % para los adultos mayores de 60 años), y solo alrededor de 10 % afirma que votaría por un desmovilizado de la guerrilla. Lo más preocupante, en el escenario de posconflicto, es que menos de 1 % de la población confía en las Farc y que en especial los jóvenes ve improbable el perdón y reconciliación

con este grupo: mientras 67 % de los adultos mayores de 60 años cree que es posible, tan solo 45 % de los jóvenes piensa lo mismo (García *et al.*, 2015).

3. Bases de datos disponibles

En esta sección listamos y describimos las bases de datos sobre jóvenes o con información relevante para jóvenes disponibles en Colombia. En total, con la búsqueda encontramos 31 fuentes de información relevantes. La tabla 7 presenta bases de datos relacionadas con sistemas de información sobre jóvenes, demografía, encuestas de hogares y multipropósito, educación, salud, violencia y crimen, mercado laboral, opinión pública, valores, participación y uso del tiempo y prácticas culturales. En los anexos puede encontrarse una descripción más detallada de las bases mencionadas.

Tabla 7. Bases de datos disponibles con información sobre jóvenes en Colombia

	Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
A. Sistemas de información sobre jóvenes				
Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia	Información sobre salud, educación, violencia, legislación y otros para jóvenes	Sistema de información	N/A	N/A
B. Demografía				
Censo y proyecciones poblacionales	Proyecciones poblacionales con base en el censo de 2005, desagregado por sexo, ciclo vital y otros.	Longitudinal, censal	1985-2020	Municipio
Estadísticas vitales	Nacimientos y defunciones, con causa, desagregado por sexo, ciclo vital y otros.	Longitudinal, censal	1985-2020	Municipio
C. Encuestas de hogares y multipropósito				
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV)	Características de las viviendas (e.g., acceso a servicios), hogares (e.g., información sobre el jefe del hogar) y personas de todas las edades (e.g., educación, salud, gastos, fuerza laboral).	Corte transversal. Muestra representativa nacional para grandes regiones y zonas urbanas y rurales	1997, 2003, 2007, 2008, 2010 - 2016	Municipio
Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA)	Información sobre las comunidades, viviendas, hogares y personas, tales	Longitudinal. Muestra representativa de	2010, 2013, 2016	Comunidad (Barrios en zonas

	Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
	como ingresos, empleo, consumo, educación, salud, primera infancia, juventud y otras.	estratos 1 a 4 a nivel nacional y en cinco regiones para zonas urbanas, y para pequeños productores en cuatro regiones.		urbanas y veredas en zonas rurales)
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales – Sisbén	Incluye puntaje Sisbén e información a nivel de hogar y personas sobre posesión de bienes, material de la vivienda, y características demográficas y socioeconómicas.	Longitudinal. Censal.	1994 - 2017	Municipio
Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH	Información sobre el hogar (materiales predominantes, acceso a servicios) y personas (edad, sexo, educación, desempleo, fecundidad y otros)	Corte transversal. Muestra representativa nacional, urbano rural y por departamentos.	2006 - 2017	Departamento
Censo Nacional Agropecuario	Caracterización socioeconómica de los hogares y de predios, productores, prácticas agrícolas, inventario pecuario, actividad pesquera, maquinaria, área y usos del suelo	Censal para unidades productoras agropecuarias y unidades no agropecuarias	1960, 1970, 2014	Municipio

D. Educación

Pruebas Saber	Resultados en la prueba, características demográficas y socioeconómicas de los estudiantes y sus hogares	Corte transversal. Censal para estudiantes de colegios públicos y privados	2000-2016	Municipal
Sistema de matrículas (SIMAT)	Reportes estudiante a estudiante y docente a docente (esto solo en colegios oficiales).	Panel. Censal para estudiantes de colegios oficiales y no oficiales.	2004-2016	Municipal
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)	Información sobre educación superior, como matrícula y desempeño.	Panel. Censal para estudiantes de educación superior.	2002-2015	Municipal

	Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)	Información sobre deserción, matrícula, desempeño.	Panel. Censal para estudiantes de educación superior.	2002-2015	Municipal
Base de datos del Icetex	Información sobre créditos, becas e información individual y de hogares.	Panel. Censal para estudiantes con créditos con el Icetex	2002-2016	Municipal
Programme for International Student Assessment (PISA)	Resultados en la prueba, información contextual del estudiante, su hogar y familia, colegio, docentes y comunidad.	Corte transversal. Muestra con cobertura nacional y sobremuestra en Bogotá, Manizales, Medellín y Cali.	2006, 2009, 2012, 2015	Municipal (Bogotá, Manizales, Medellín y Cali)
Estudio sobre la caracterización de la media	Información general sobre los establecimientos, rectores, coordinadores, docentes y estudiantes de media.	Corte transversal. Muestra representativa nacional y urbana-rural de establecimientos oficiales.	2015	Municipal
Encuesta de Clima Escolar y Victimización (ECEV)	Información demográfica y socioeconómica, consumo de sustancias, agresión, acoso e inseguridad.	Corte transversal. Cobertura para ciudad de Bogotá, representativo para colegios oficiales.	2013, 2015	Municipal (Bogotá)
E. Salud				
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)	Características de los hogares y las mujeres en edad fértil, salud sexual y reproductiva, mortalidad infantil, salud materno-infantil, violencia doméstica, cuidado parental, afiliación y uso de servicios de salud.	Corte transversal. Cobertura nacional, representatividad urbano-rural, seis regiones, dieciséis subregiones y departamental.	1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015	Municipal
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN)	Características demográficas y socioeconómicas, estado nutricional, actividad física, seguridad alimentaria, hábitos	Corte transversal. Cobertura nacional, representatividad urbano-rural, seis regiones, catorce subregiones y	2005, 2010, 2015	Municipal

	Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
	alimentarios y lactancia materna.	treinta y dos departamentos.		
Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO)	Cuenta con información de los RIPS, RUAf y PILA. Los RIPS, en particular, tienen información individual sobre la prestación de servicios de salud (con características de la persona y diagnóstico).	Panel. Censal.	2009-2017	Municipal
Encuesta Nacional de Salud Mental	Características demográficas y socioeconómicas, salud mental, problemas, trastornos mentales y acceso a los servicios de salud mental.	Representatividad nacional y regional, para niños, adolescentes y adultos.	1993, 1997, 2003, 2015	Municipal

F. Violencia y crimen

Registro Único de Víctimas (RUV)	Victimización en medio del conflicto armado, por año, por hecho victimizante y con enfoque diferencial.	Censal para la población víctima.	1985-2017	Municipal
Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO)	Ocurrencia de delitos con lugar, fecha y hora exactos de ocurrencia, presunto motivo, número de víctimas y edad del perpetrador o víctima del hecho.	Censal.	2010-2016	Comunidades (barrios o veredas)
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC)	Ocurrencia de hechos delictivos, percepción de la ciudadanía sobre la seguridad.	Corte transversal. Muestra con cobertura en veintiocho ciudades.	2012-2015	Municipio
Estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)	Características de la población privada de la libertad, condiciones excepcionales, nacionalidad, tipo de condena, reincidencia y otros.	Panel. Censal.	2013-2017	Municipio

G. Mercado laboral

	Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)	Contribuciones a salud, pensiones y seguridad social pagada por empleadores y empleados. Contiene información de todos los empleados formales.	Panel. Censal para empleados formales.	Periodicidad bimensual	Municipio
Observatorio Laboral para la Educación (OLE)	Oferta de graduados, perfil de graduados, ingreso mensual promedio y vinculación al sector formal.	Corte transversal.	2001-2014	Municipio

H. Opinión pública, valores, participación política

World Values Survey (WVS)	Características generales, valores de género, creencias y preferencias políticas, religión, felicidad y satisfacción con la vida, confianza en otras personas e instituciones, valores importantes, principales problemáticas del país y del mundo, participación en grupos sociales y políticos y percepciones sobre sí mismo.	Corte transversal. Muestra representativa nacional.	1981-1984, 1990-1994, 1995-1998, 1999-2004, 2005-2009, 2010-2014	Departamental
Latinobarómetro	Características generales, valores de género, creencias y preferencias políticas, religión, felicidad y satisfacción con la vida, confianza en otras personas e instituciones, valores importantes, principales problemáticas del país y del mundo, participación en grupos sociales y políticos y percepciones sobre sí mismo.	Corte transversal. Muestra representativa nacional.	1995-1998, 2000-2011, 2013, 2015	Departamental
Barómetro de las Américas (LAPOP)	Características demográficas y sociales de los encuestados, sus percepciones sobre los principales problemas del	Corte transversal. Muestra representativa nacional.	2004-2016	Municipal

	Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
	país, confianza en las demás personas y en las instituciones, participación en grupos sociales y políticos, preferencias políticas, victimización, percepciones sobre la paz en Colombia.			
Encuesta de Cultura Política (ECP)	Percepción ciudadana, las creencias, actitudes y valores sobre el entorno político, el conocimiento sobre el concepto de la democracia, los espacios de participación ciudadana y su utilidad, los obstáculos a la participación ciudadana, confianza hacia el proceso electoral, posiciones políticas y confianza en las principales instituciones del Estado.	Corte transversal, Muestra representativa nacional y muestras especiales.	2007, 2008, 2011, 2013	Municipal
I. Uso del tiempo y prácticas culturales				
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)	Características generales, cuidado de los niños, fuerza laboral, actividad principal y tiempo destinado a actividades tales como dormir, comer, preparar alimentos, oficios del hogar, hacer ejercicio, actividades artísticas, navegar en Internet y otros.	Corte transversal, muestra representativa nacional.	2013	Municipio
Encuesta de Consumo Cultural (ECC)	Asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, asistencia a espacios culturales, formación y práctica de actividades culturales, lectura de	Corte transversal, muestra representativa nacional.	2007, 2008, 2010, 2012, 2014	Municipio

Información	Tipo	Años disponibles	Nivel geográfico mínimo
libros, uso de Internet y otros.			

Fuente: realizado por los autores.

*El nivel geográfico mínimo indica la mínima desagregación geográfica posible, mas no indica que la encuesta sea representativa a dicho nivel.

4. Brechas en el bienestar de los jóvenes: un análisis cuantitativo

Con la revisión de literatura es claro que, si bien existe bastante información relevante en las diferentes dimensiones consideradas, hay vacíos importantes que impiden caracterizar completamente a los jóvenes en el país. En esta sección se complementará la información utilizando bases de datos relevantes para la población joven, intentando identificar brechas en su bienestar y percepciones por niveles de pobreza, exposición a la violencia y por zona geográfica. No obstante, ninguna base de datos disponible es representativa a nivel nacional para la población joven, por lo cual, si bien realizamos inferencia estadística para identificar brechas, es imposible utilizar esta información para ver la situación de los jóvenes en el país y caracterizar, por ejemplo, sus aspiraciones, expectativas, percepciones sobre el proceso de paz y otros.

4.1 Bases utilizadas

Para el análisis de datos compilamos información de diversas fuentes. En todas, buscamos caracterizar la exposición a la pobreza, a la violencia y la zona en la cual viven los hogares para identificar brechas en las diferentes dimensiones estudiadas. No obstante, debido a la gran heterogeneidad de las bases de datos, de las métricas de sus mediciones, edades de las personas muestreadas, representatividad y disponibilidad de información, en general, fue imposible realizar un análisis consolidado con alta comparabilidad. Dado esto, para cada base se utilizan diferentes indicadores de exposición a la pobreza y violencia, según la disponibilidad de datos, que permiten dar una visión inicial a la problemática pero que debe ser complementada con la encuesta de *Next Generation Colombia*.

La primera fuente de información que utilizamos es la World Values Survey, una encuesta representativa a nivel nacional que cuenta con información para la población entre 18 y 28 años. En esta encuesta, contamos con información sobre la ubicación del hogar en la escala de ingresos

nacional (que es un indicador crudo de pobreza), la victimización directa o de un familiar a un hecho violento, y la ubicación del hogar en zona urbana o rural. Esta encuesta, adicionalmente, tiene información relevante sobre identidad, confianza generalizada y sensación de seguridad en el barrio o vereda donde la persona vive.

La segunda fuente de información utilizada fue la base de datos sobre educación media en Colombia, recolectada en 2015. Esta encuesta es representativa para los estudiantes de educación media en el país (edades entre 14 y 25 años), por lo cual permite tener una visión completa del comportamiento de dimensiones de interés según ingreso, exposición a la violencia y zona. La tercera fuente de información es la reciente Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, cuya información es pública desde mayo de 2017 y, por lo tanto, no ha sido explorada aún. Esta encuesta es representativa a nivel nacional y es la única encuesta que permite caracterizar adecuadamente la salud mental y emocional de los jóvenes en el país al haber utilizado cuestionarios validados con buenas propiedades psicométricas.

La cuarta base utilizada es el Barómetro de las Américas, que ofrece información relevante sobre confianza en instituciones, preferencias y percepciones políticas y, lo más importante, es la única base en el país con información sobre las percepciones de los ciudadanos frente al proceso de paz y de reintegración de las Farc en la vida civil. Por último, debido a que algunas bases no cuentan con información sobre exposición individual a la violencia, utilizamos el Panel Municipal del Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), que ofrece información sobre violencia y conflicto a nivel municipal.

4.2 Dimensiones y medidas

4.2.1 Identidad

Como indicadores de sentimientos de identidad de los jóvenes, utilizamos tres indicadores de la World Values Survey 2014, siendo estos (1) si el joven se siente un ciudadano del mundo; (2) si se siente parte de su comunidad local; y (3) si se siente parte de su país.

4.2.2 Educación

Utilizamos cuatro indicadores de educación que no se han considerado en estudios previos para jóvenes entre 14 y 25 años de la base de datos de caracterización de la educación media 2015. Primero, utilizamos variables que indican si los jóvenes esperan y aspiran ingresar a educación superior una vez terminen la educación media. Segundo, utilizamos una batería de 38 preguntas que reflejan cuán seguros se sienten los jóvenes para desempeñar ciertas tareas o conseguir determinados objetivos, con lo cual construimos un índice de autoeficacia global. Este índice ha sido extensamente utilizado en la literatura, resulta válido y tiene muy buenas propiedades psicométricas (alpha de Cronbach de 0.91). Por último, construimos un índice de perseverancia utilizando 12 preguntas sobre persistencia y autocontrol de los jóvenes (alpha de Cronbach de 0.78).

4.2.3 Violencia y salud mental

Primero, utilizamos la World Values Survey 2014 para identificar si existen brechas por pobreza, exposición a la violencia y zona (urbano/rural) en la percepción de los jóvenes sobre cuán seguro es el barrio o vereda en el cual viven. Segundo, utilizamos la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 para caracterizar brechas en salud mental y emocional. En primer lugar, utilizamos un conjunto de veinte preguntas del Self Reporting Questionnaire (SRQ), un cuestionario validado a nivel nacional e internacional con buenas propiedades psicométricas, para construir una medida de sintomatologías asociadas a la depresión o angustia generalizada. En segundo lugar, utilizamos diecisiete ítems del PTSD Checklist (PCL-C), una escala que permite identificar sintomatologías relacionadas con el trastorno de estrés postraumático con base en el manual DSM-4 de diagnóstico de enfermedades y desórdenes mentales.

4.2.4 Confianza

Utilizamos información de la World Values Survey 2014 del Barómetro de las Américas 2016 sobre confianza interpersonal y en las instituciones. En particular, contamos con medidas sobre confianza generalizada (i.e., en los demás), en las elecciones, en el congreso, en las fuerzas armadas, en el sistema judicial, en el ejecutivo, en los partidos políticos y en la iglesia católica.

4.2.5 Proceso de paz

Utilizamos información del Barómetro de las Américas 2016 sobre percepciones de los jóvenes sobre la guerra en Colombia y el proceso de paz. En particular, contamos con información sobre si los jóvenes creen que una salida armada es la mejor opción para la guerra del país, si están de acuerdo con la reintegración de combatientes de las Farc a la vida civil, si creen que el perdón y la reconciliación con las Farc es posible, si apoyan el proceso de paz del gobierno del presidente Santos y las Farc, y si creen que de alcanzar la paz con este acuerdo mejorará la economía y la seguridad del país.

4.2 Análisis

Para analizar las brechas por pobreza, exposición a la violencia y zona de residencia se realizan regresiones multivariadas. En particular, se estiman múltiples modelos econométricos con especificaciones como la presentada en la ecuación 1, donde Var_i es la variable de resultado a analizar (que cambiará a través de modelos), $Pobre_i$ es una variable que indica si la persona es pobre o, en caso de no existir la información puntual, si pertenece al grupo de ingresos más bajo del país, $Violencia_i$ indica exposición a la violencia, donde dependiendo de la disponibilidad según la base de datos es victimización directa o exposición a nivel municipal y $Rural_i$ es una variable que toma el valor de 1 para jóvenes que viven en zonas rurales. Por último, $Controles_i$ es un vector de variables de control que incluye sexo y género, y ε_i es un componente aleatorio del modelo.

$$Var_i = \beta_0 + \beta_1 Pobre_i + \beta_2 Violencia_i + \beta_3 Rural_i + Controles_i \theta + \varepsilon_i$$

Por la poca disponibilidad de bases de datos específicas sobre jóvenes, este análisis de datos tiene fuertes limitaciones que deben notarse. Primero, en el país no existe una encuesta representativa de los jóvenes, por lo cual las bases con las que contamos son submuestras de jóvenes con edades entre catorce y veintiocho años que no son representativas de personas en dicho rango de edad. Lo anterior impide generalizar los hallazgos a todos los jóvenes del país. Segundo, el no tener información representativa para los jóvenes impide hacer un análisis descriptivo de su situación, es decir, impide analizar detalladamente la identidad de los jóvenes, sus preferencias políticas o sus preferencias y percepciones sobre la paz. Tercero, al no tener una única base de datos sobre

jóvenes, sino depender de diversas fuentes de información, los análisis no son totalmente comparables, al tener diferentes rangos de edades, diferentes variables y diferentes métricas o mediciones de mismas dimensiones. En particular, en las diferentes bases hay diversas mediciones de pobreza y violencia. Por la baja comparabilidad, no sería adecuado comparar el tamaño de la magnitud de las diferentes asociaciones, por lo cual para este análisis se reportará exclusivamente el signo de la asociación y su significancia estadística. Por último, la estructura de los datos no permite identificar efectos causales, por lo cual los resultados de las estimaciones serán asociaciones. A pesar de estas limitaciones, un análisis inicial con las bases de datos disponibles arroja información valiosa que puede alimentar futuros análisis o estudios.

4.3 Hallazgos

La tabla 8 resume los resultados de estimar veinticuatro modelos econométricos mediante mínimos cuadrados ordinarios. En particular, reportamos resultados para variables relacionadas con identidad, educación, violencia y salud mental, confianza y participación y preferencias relacionadas con política y paz. Presentamos las edades para las cuales estaba disponible la información de cada dimensión, y el signo y significancia estadística de las asociaciones, controlando por características demográficas básicas, entre cada variable con (1) indicadores de pobreza, (2) de exposición a la violencia o victimización directa y (3) con vivir en zona rural.

Tabla 8. Análisis cuantitativo: brechas por pobreza, exposición a la violencia y zona

	Edades	Pobreza	Violencia	Rural
A. Identidad^a				
Me considero un ciudadano del mundo	18-28	(-)	(-)*	(+)
Me considero parte de mi comunidad local	18-28	(+)	(+)	(-)*
Me considero parte del país	18-28	(+)	(-)	(+)
B. Educación^b				
Aspiraciones de entrar a educación superior	14-25	(-) ^{***}	(-) ^{***}	(-) ^{***}
Expectativas de entrar a educación superior	14-25	(-) ^{***}	(-) ^{***}	(-) ^{***}
Autoeficacia	14-25	(-) ^{***}	(-) ^{***}	(+) ^{***}
Perseverancia	14-25	(-) ^{***}	(+)	(+) ^{***}
C. Violencia y salud mental^c				
Siente que el barrio/vereda es seguro	18-28	(+)	(-) ^{**}	(-) ^{***}
Síntomas de depresión/angustia	14-28	(+)	(+) ^{***}	(-)
Síntomas de trastorno de estrés postraumático	14-28	(+) ^{**}	(+) ^{***}	(-)

	Edades	Pobreza	Violencia	Rural
D. Confianza^d				
Confía en la mayoría de las personas	18-28	(-)*	(-)**	(*)
Confianza en las elecciones	18-28	(+)	(-)	(+)
Confianza en el congreso	18-28	(+)	(-)	(+)
Confianza en las fuerzas armadas	18-28	(-)	(-)	(-)
Confianza en el sistema judicial	18-28	(+)***	(-)	(+)
Confianza en el ejecutivo	18-28	(+)*	(-)	(+)
Confianza en los partidos políticos	18-28	(+)**	(-)	(+)
Confianza en la iglesia católica	18-28	(-)	(-)	(+)
E. Proceso de paz^e				
Mejor salida al conflicto es lucha militar	18-28	(-)	(-)**	(-)**
Está de acuerdo con reintegración de FARC	18-28	(+)	(-)	(-)**
Perdón y reconciliación con FARC es posible	18-28	(+)	(-)	(-)*
Apoyo al proceso de paz con las FARC	18-28	(+)**	(+)*	(+)*
Cree que firma de la paz mejorará economía	18-28	(-)	(-)	(+)
Cree que firma de la paz mejorará seguridad	18-28	(-)	(+)	(+)*

Fuente: cálculos propios

Resultados de estimar diferentes modelos econométricos por mínimos cuadrados ordinarios. En todas las regresiones controlamos por edad y sexo. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Se reportan las edades de los jóvenes para quienes hubo datos disponibles y la dirección y significancia de la relación entre cada variable y diferentes indicadores de (1) pobreza, (2) exposición a la violencia y (3) zona de residencia (rural). ^a Información disponible en la World Values Survey, ^b disponible en la base de caracterización de la media, ^c disponible en la World Values Survey y la Encuesta Nacional de Salud Mental, ^d disponible en el Barómetro de las Américas y la World Values Survey, ^e disponible en el Barómetro de las Américas.

Los resultados, en general, siguen una clara tendencia acorde con lo encontrado en la revisión de literatura, mostrando brechas importantes en las diferentes dimensiones por pobreza, exposición a la violencia y zona de residencia. En primer lugar, existen algunas diferencias significativas en identidad: en promedio, los jóvenes de la muestra que se encuentran en municipios más violentos afirman sentirse ciudadanos del mundo en menor cuantía, mientras aquellos que viven en zonas rurales afirman sentirse menos parte de sus comunidades locales.

Segundo, respecto a educación, existen brechas muy importantes que deben notarse. Primero, los jóvenes con niveles socioeconómicos más bajos, que viven en municipios más violentos y que habitan zonas rurales tienen, en promedio, expectativas más pesimistas frente a la posibilidad de ingresar a un programa de educación superior y aspiran menos a lograr dicho fin. Esto resulta preocupante en la medida que las aspiraciones y expectativas, al motivar comportamiento, pueden imponer un freno a tomar acciones que conduzcan a resultados positivos en el largo plazo y a una mayor movilidad social. Segundo, los jóvenes de menor nivel socioeconómico tienen en promedio

menores niveles de autoeficacia y perseverancia. Finalmente, un resultado que resulta algo contra intuitivo de acuerdo a los hallazgos de la literatura, pero que puede generarse por sesgos por omisión de variables, es que jóvenes en zonas rurales tienen mayores niveles de autoeficacia y perseverancia.

Tercero, siguiendo hallazgos de otros estudios, en promedio, los jóvenes en zonas rurales sienten que sus comunidades son más inseguras, algo que se puede relacionar con la presencia del conflicto armado principalmente en estas zonas. Adicionalmente, jóvenes en situación de pobreza y más expuestos a la violencia exhiben un mayor número de sintomatologías asociadas a depresión y angustia generalizada y, en particular, a trastorno de estrés postraumático, lo cual va acorde con evidencia internacional y nacional frente a las consecuencias de la pobreza y violencia sobre la salud mental y emocional. No obstante, debe recalarse que estos resultados no pueden interpretarse como causales.

Cuarto, los resultados indican que en promedio los jóvenes de menores niveles socioeconómicos y más expuestos a la violencia son a su vez los que afirman confiar menos en las demás personas. No obstante, los jóvenes de menor nivel socioeconómico también son quienes afirman confiar más en el sistema judicial, en el ejecutivo y en los partidos políticos. Para confianza en las demás instituciones no existen diferencias estadísticamente significativas.

Quinto, existen brechas importantes en las percepciones y preferencias de una muestra de jóvenes frente a la guerra y el proceso de paz en Colombia. Por una parte, los jóvenes en municipios más golpeados por la violencia y en aquellos en zonas rurales apoyarían menos una salida militar al conflicto, y están más a favor de una salida negociada. Este resultado es acorde con que, en promedio, los jóvenes de la muestra con menor nivel socioeconómico, en zonas más violentas y en zonas rurales afirman apoyar más el proceso de paz que adelantó el Gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc. En zonas rurales, en particular, los jóvenes son más propensos a creer que dicho proceso mejorará la seguridad en el país. A pesar de esto, los resultados muestran algo que resulta de cierta forma paradójico y es que si bien en zonas rurales apoyan más la salida negociada, son más escépticos frente a la reintegración y el eventual perdón y reconciliación de la sociedad con las Farc.

5. Limitaciones y direcciones a futuro

Después de realizar una revisión de literatura extensa, de identificar las bases de datos disponibles en el país con información para los jóvenes y de analizar alguna información inexistente en literatura previa con dichas bases hay múltiples limitaciones, vacíos y preguntas por resolver para tener una visión completa de la situación, preferencias, aspiraciones, expectativas y trayectorias de los jóvenes en Colombia.

En primer lugar, en la literatura no se ha explorado a profundidad lo relacionado con identidad y, más importante aún en la coyuntura del país, sobre la participación, preferencias, creencias y aspiraciones de los jóvenes en relación con el proceso de paz con las Farc y la salida al conflicto con otros actores armados. Fuera de eso, si bien los temas de educación y trabajo se han explorado a profundidad, aún hay temas fundamentales por trabajar, como los relacionados con las expectativas y aspiraciones de los jóvenes y las habilidades que desarrollan en su formación académica y las que requieren para ingresar al mercado laboral. Por último, frente al tema de exposición y experiencias con la violencia y el conflicto, aún hay muchas preguntas por resolver frente a las afectaciones sociales y psicológicas de dicha exposición, y cómo estas interactúan para determinar diferentes trayectorias en las vidas de los jóvenes.

Segundo, si bien hay múltiples bases de datos con información para jóvenes entre catorce y veintiocho años, ninguna es representativa en específico de este segmento poblacional, por lo cual no hay una fuente única, que permita comparaciones y que ofrezca información que permita caracterizar y describir la situación de los jóvenes en el país. En este documento se utilizaron múltiples fuentes de información para analizar brechas en diversas dimensiones de los jóvenes, no obstante, dicho análisis tiene fuertes limitaciones por la poca comparabilidad de las mediciones e indicadores y por no representar a los jóvenes.

En general, la literatura y bases disponibles no permiten tener una caracterización completa y holística de la situación y trayectorias de los jóvenes, por lo cual resulta primordial obtener información de calidad y de múltiples dimensiones fundamentales para una muestra representativa de este segmento poblacional. Un esfuerzo de este estilo permitirá entender mejor a los jóvenes,

con miras a diseñar políticas adecuadas y definir los caminos a seguir en temas de educación, trabajo, identidad, salud mental y paz.

6. Referencias

- Abud, M. J., Lorch, S., Mikula, L. y Rosario, J. (2015). *Engaging the future of Colombia's youth: in Ladera, el Retiro and Buenaventura*. Reporte, SIPA y Fundación Carvajal.
- Agasisti, T. y Longobardi, S. (2014). Inequality in education: can Italian disadvantaged students close the gap? *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 52, 8-20.
- Agudelo, D., Garzón, C. y Sánchez, D. (2008). Características de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios. *International Journal of Psychological Research*, 1 (1), 34-39.
- Alejo, E. (2007). Estudio epidemiológico del trastorno por estrés posttraumático en población desplazada por la violencia política en Colombia. *Universitas Psychologica*, 6(3): 623-635.
- Angulo, R., Azevedo, J., Gaviria, A. y Páez, G. N. (2012). Movilidad social en Colombia. Documentos CEDE No. 42. Universidad de los Andes.
- Ávila, A. (2014). *Gestión de la seguridad en Bogotá*. Bogotá, Colombia: Aguilar, Altea. Taurus, Alfaguara.
- Banco de la República (2017). *Boletín de indicadores económicos*. Colombia.
- Barro, R. y Lee, J. (2010). A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010. *Journal of Development Economics*, Vol. 104, pp.184-198.
- Bassi, M., Busso, M., Urzúa, S. y Vargas, J. (2012). *Disconnected: skills, education, and employment in Latin America*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.
- Bonilla, L., Botta, N. y Ham, A. (2016). Information policies and higher education choices: experimental evidence from Colombia. Working Paper.
- Brook, D., Brook, J., Rosen, Z., De la Rosa, M., Montoya, I. y Whiteman, M. (2003). Early risk factors for violence in Colombian adolescents. *The American Journal of Psychiatry*, 160, 1470-1478.
- Cadena, X. (2014). *Colombia en movimiento 2010-2013: los cambios en la vida de los hogares a través de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA)*. Ediciones Uniandes, Bogotá: Colombia.
- Camacho, A., Gaviria, A. y Rodríguez, C. (2010). El consumo de droga en Colombia. Documentos CEDE No. 22. Universidad de los Andes.
- Camacho, A. y Mejía, D. (2012). *Las externalidades de los programas de transferencias condicionadas sobre el crimen: el caso de Familias en Acción en Bogotá*. Documento de trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en:

<https://publications.iadb.org/es/publicacion/15858/las-externalidades-de-los-programas-de-transferencias-condicionadas-sobre-el>

- Camacho, A., Messina, J. y Uribe, J. P. (2017). The expansion of higher education in Colombia: bad students or bad programs? *Documentos CEDE*, No. 13. Universidad de los Andes.
- Cayon, E., Correa, J. y Sarmiento-Sabogal, J. (2017). Does attending a public or private university make a difference for students in Colombia? *International Review of Management and Marketing*, 7(2), 293-299.
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Reporte, Informe General, Grupo de Memoria Histórica, Colombia.
- CERAC (2014). *Violencia juvenil en contextos urbanos*. Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). Bogotá, Colombia.
- Concordia (2017). *Reaching across sectors: challenges and opportunities for youth employment in Colombia*. Reporte.
- Cortés, D. y Vargas, J. F. (2012). Inequidad regional en Colombia. *Documentos CEDE* No. 34. Universidad de los Andes.
- Cristancho, J., Harker., A. y Molano, A. (2016). Desarrollo humano en contextos vulnerables: impacto de choques de violencia urbana sobre el desempeño académico. *Documentos CEDE* No. 33. Universidad de los Andes.
- Cuartas, J. (2016). ¿Desigualdad y pobreza como determinantes de la confianza generalizada? Análisis con datos panel. *Desarrollo y Sociedad*, 76, 91-121.
- Cuartas, J. (2018). Neighborhood crime undermines parenting: violence in the vicinity of households as a predictor of aggressive discipline. *Child Abuse & Neglect*, p. 388-399.
- Cuartas, J., Harker, A., Moya, A. (2016). Parenting, scarcity and violence: theory and evidence for Colombia. *Documentos CEDE*, No. 38. Universidad de los Andes.
- Cuartas, J. y Moya, A. (2016). Self fulfilling prophecies: expectations, psychological distress, and social mobility in Colombia. Universidad de los Andes. Disponible en: <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/13601/u728671.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- DANE (2009). Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020. *Estudios postcensales 7*, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia.

- DANE (2016a). Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2015. Boletín Técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Colombia.
- DANE (2016b). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2016. Boletín técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia.
- DANE (2016c). Encuesta de transición de la escuela al trabajo. Boletín Técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia
- De Mello, J., Mejía, D. y Suárez, L. (2013). The pharmacological cannel revisited: alcohol sales restrictions and crime in Bogotá. CAF Working Paper.
- Delgado, M. (2014). *La educación básica y media en Colombia: retos en equidad y calidad*. Fedesarrollo.
- DNP (2016). *Uno de cada dos desempleados en Colombia es menor de 29 años*. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/Paginas/Ranking-de-las-ciudades-con-mayor-desempleo-juvenil.aspx>.
- Duflo, E. (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *American Economic Review*, 91(4), 795-813.
- Dweck, C., Walton, G. y Cohen, G. (2014). *Academic tenacity: mindsets and skills that promote long-term learning*. Bill y Melinda Gates Foundation.
- Dueñas, X. (2016). Cómo revelan las pruebas Saber la realidad de la educación del país. *El Tiempo*, publicado el 17 de abril de 2017. Recuperado el 11 de mayo del 2017 en: <http://www.eltiempo.com/vida/educacion/columna-de-la-directora-del-icfes-como-revelan-las-pruebas-saber-la-realidad-de-la-educacion-del-pais-78634>
- Echeverry, J.C., N, Salazar y V, Navas, (2001), Nos Parecemos al Resto del Mundo? El Conflicto Colombiano en el Contexto Internacional, Archivos de Macroeconomía, No. 143, Departamento Nacional de Planeación.
- Agudelo, P. (2008). Faltan más jóvenes en política. *El Colombiano*. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/historico/faltan_mas_jovenes_en_politica-IHEC_20293
- Redacción (2009). ¿Por qué los jóvenes son apáticos a la política? *El Tiempo*. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6569327>
- Fergusson, L., Ibáñez, A. y Riaño, J. F. (2015). Conflict, educational attainment and structural transformation: la violencia in Colombia. Documentos CEDE edición especial CESED No. 35. Universidad de los Andes.

- Florez, A. y Jayaram, S. (2016). *Bridging the skills gap in Latin America and the Caribbean*. FHI 360, R4D. Washington, D.C.
- García, S., Maldonado, D. y Rodríguez, C. (2014). Propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica y media en Colombia. Cuadernos Fedesarrollo No. 49. Fedesarrollo
- García, S., Maldonado, D., Acosta, M., Castro, N., Granada, D., Londoño, E., Pérez, J., Rey, C., Rosales, L. & Villalba, H. (2016). Características de la oferta de la educación media en Colombia. *Documentos de Trabajo Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo No 33*. Universidad de los Andes.
- García, S. y Ritterbusch, A. (2015). Child poverty in Colombia: construction of a multidimensional measure using a mixed-method approach. *Child Indicators Research*, 8, 801-823.
- García, M. (2014). Cultivos ilícitos y confianza institucional en Colombia. *Política y Gobierno*, XXI (1), 95-126.
- García, M., Montalvo, J. y Seligson, M. (2015). *Cultura política de la democracia en Colombia, 2015*. Observatorio de la Democracia, Universidad de los Andes.
- García, M. y Rodríguez, J. C. Barómetro de las Américas, Colombia 2016: Colombia Joven. Presentación preparada para Colombia Joven, Universidad de los Andes.
- García-Suaza, A., Guataquí, J. C., Guerra, J. y Maldonado, D. (2014). Beyond the mincer equation: the internal rate of return to higher education in Colombia. *Education Economics*, 22(3), 328-344.
- Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F. y Shleifer, A. (2004). Do institutions cause growth? *Journal of Economic Growth*, 9(3), 271-303.
- Gómez, S., Mejía, D. y Tobón, S. (2017). The deterrent effect of public surveillance cameras on crime. Documentos CEDE, edición especial CESED No 9. Universidad de los Andes.
- Gómez-Restrepo, C., Bohórquez, A., Tamayo, N., Rondón, M., Bautista, N., Rengifo, H. y Medina, M. (2016a). Trastornos depresivos y de ansiedad y factores asociados en la población de adolescentes colombianos, Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45(S1), 50-57.
- Gómez-Restrepo, C., Tamayo, N., Buitrago, G., Guarnizo-Herreño, C., Garzón-Orjuela, N., Eslava-Schmalbach, J., de Vries, E., Rengifo, H., Rodríguez, A. y Rincón, C. (2016b). Violencia por conflicto armado y prevalencias de trastornos del afecto, ansiedad y problemas

- mentales en la población adulta colombiana. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45(S1), 147-153.
- González, M (2016). *El verdadero fin del conflicto armado: jóvenes vulnerables, educación rural y construcción de la paz en Colombia*. Reporte, Norwegian Centre for Conflict Resolution.
- González-Velosa, C., Rucci, G., Sarzosa, M. y Urzúa, S. (2015). Returns to higher education in Chile and Colombia. IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-587.
- Gutiérrez-Forero, D. y Castro-Escobar, E. (2015). Estado del bono demográfico y efectos en el desarrollo económico y social en Colombia. *Revista Jurídicas*, 12(2), 72-89.
- Hanushek, E. y Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. *Journal of Economic Growth*, 17, 267-321
- Haugan, G. (2016). The effect of urban violence on student achievement in Medellín, Colombia. Documentos CEDE, No. 9. Universidad de los Andes
- Haushofer, J., Crockett, M., y Lawson, G. (2015). Neurobiological poverty traps. World Development Report.
- Haushofer, J., y Fehr, E. (2014). On the psychology of poverty. *Science*, 344, 862-867.
- Hoyos, R., Rogers, H. y Székely, M. (2016). *Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades*. Banco Mundial, Washington, DC.
- ICFES (2016). *Resultados PISA 2015: desempeño, equidad y cobertura*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
- Ibáñez, A.M. (2008). El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza. Ediciones Uniandes. Bogotá, Colombia.
- Ibáñez, A.M., y Moya, A. (2007). ¿Cómo deteriora el desplazamiento forzado el bienestar de los hogares desplazados: análisis y determinantes de bienestar en los municipios de recepción. *Coyuntura Social*, 37: 29-62.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2010a). Vulnerability of Victims of Civil Conflict: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia. *World Development* 38 (4): 647-663.
- Ibáñez, A. M. y A. Moya (2010b). Do Conflicts Create Poverty Traps? Asset Losses and Recovery for Displaced Households in Colombia. En R. Di Tella, S. Edwards y E. Scharfgrödsky, eds., *The Economics of Crime* (pp. 137-172). Chicago: University of Chicago Press.
- Jaramillo, I. D. (2016). *Desempleo juvenil en Colombia*. Friedrich Ebert Stiftung.

- Llorente, M., Chaux, E. y Salas, L. (2005). *De la casa a la guerra: nueva evidencia sobre la violencia juvenil en Colombia*. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes.
- Londoño, N., Muñiz, O., Correa, J.E., Patiño, C., Jaramillo, G., Raigoza, J., Toro, L., Restrepo, D. y Rojas, C. (2005). Salud mental en víctimas de la violencia armada en Bojayá (Chocó, Colombia). *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(4): 493-505.
- Londoño-Vélez, J., Rodríguez, C. y Sánchez, F. (2017). The intended and unintended impacts of a merit-based financial aid program for the poor: the case of Ser Pilo Paga. Documentos CEDE No 24. Universidad de los Andes.
- Lugo, N., Hernández, G. y Colmenares, J. (2016). Infraestructura escolar, dimensionamiento y proyección. Documentos de Trabajo No. 39 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.
- Manpower Group (2015). *Talent shortage survey*. Reporte.
- Martínez, C. (2013). *Descenso de la fecundidad, bono demográfico y crecimiento económico en Colombia, 1990-2010*. Estudio a profundidad basado en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS).
- McGill, M. (2015). *Evaluation of child and youth participation in peacebuilding: Colombia*. Global Partnership for Children & Youth in Peacebuilding.
- Médicos Sin Fronteras (2006). Vivir con miedo: el ciclo de la violencia en Colombia. Reporte de Médicos Sin Fronteras, Ámsterdam.
- Médicos Sin Fronteras (2010). Tres veces víctimas: víctimas de la violencia, el silencio y el abandono: conflicto armado y salud mental en el departamento de Caquetá, Colombia. Reporte de Médicos Sin Fronteras, Ámsterdam.
- Mejía, D., Ortega, D. y Ortiz, K. (2014). Un análisis de la criminalidad urbana en Colombia. Documento de Trabajo. Disponible en: <https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2015/01/Criminalidad-urbana-en-Colombia-diciembre-2014.pdf>
- Melguizo, T., Sanchez, F. y Velasco, T. (2016). Credit for low-income students and access to and academic performance in higher education in Colombia: a regression discontinuity approach. *World Development*, 80, 61-77.
- Ministerio de Educación Nacional (2010). *Revolución educativa 2002-2010. Acciones y Lecciones*. Bogotá.

- Ministerio de Salud (2013). *Envejecimiento demográfico. Colombia 1951-2020, dinámica demográfica y estructuras poblacionales*. Colombia.
- Ministerio de Salud y Colciencias (2016). *Encuesta Nacional de Salud Mental 2015*. Tomo 1. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Salud y Profamilia (2016a). *Encuesta Nacional de Demografía y Salud*. Tomo 1. Bogotá, Colombia.
- Ministerio de Salud y Profamilia (2016b). *Encuesta Nacional de Demografía y Salud*. Tomo 2. Bogotá, Colombia.
- Melo, L., Ramos, J. y Hernández, P. (2014). La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. Borradores de Economía No. 808, Banco de la República.
- Molano, A., Harker, A. y Cristancho, J. (2016). *Efectos agudos de violencia en el desarrollo social y emocional: evidencia de dos contextos urbanos en Colombia*. Universidad de los Andes.
- Montenegro, S. (2013). ¿Perdió Colombia el bono demográfico? *Portafolio*, 8 de septiembre de 2013.
- Montenegro, A. y Meléndez, M. (2014). *Equidad y movilidad social: diagnósticos y propuestas para la transformación de la sociedad colombiana*. Ediciones Uniandes, Facultad de Economía, CEDE, Universidad de los Andes y Departamento Nacional de Planeación (DNP).
- Moya, A. (2016). Violence, psychological disorders, and induced changes in risk attitudes in Colombia. Universidad de los Andes. Disponible en: <https://ideas.repec.org/a/eee/deveco/v131y2018icp15-27.html>
- Moya, A., y Carter, M. (2014). Violence and the formation of hopelessness and pessimistic prospects of upward mobility in Colombia. NBER Working Paper No. 20463.
- O'Dougherty, M., Masten, A. y Narayan, A. (2012). Resilience processes in development: four waves of research on positive adaptation in the context of adversity. En Goldstein, S. & Brooks, R. *Handbook of Resilience in Children*. Springer US.
- OCDE (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA. OECD Publishing, París.
- OCDE (2017a). Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator).

- Vélez, C. E. y Torres, M. F. (2014). *La desigualdad de oportunidades entre los niños colombianos: avances y retos del desarrollo humano en la última década*. Documento de Trabajo No. 14 de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Disponible en: <https://egob.uniandes.edu.co/index.php/es/component/abook/book/12-documentos-de-trabajo/55-la-desigualdad-de-oportunidades-entre-los-ninos-colombianos-avances-y-retos-del-desarrollo-humano-en-la-ultima-decada>
- OCDE (2017b). *PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being*, PISA. OECD Publishing, París. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en>
- OCDE, CEPAL y CAF (2017). *Perspectivas económicas de América Latina 2017: juventud, competencias y emprendimiento*. OECD Publishing, París.
- OIM, Unicef y ICBF (2013). *Estado psicosocial de los niños, niñas y adolescentes: una investigación de consecuencias, impactos y afectaciones por hecho victimizante con enfoque diferencial en el contexto del conflicto armado colombiano*. Reporte, Bogotá, Colombia.
- Pérez-Olmos, I., Fernández-Piñeres, P. y Rodado-Fuentes, S (2005). Prevalencia del trastorno por estrés postraumático por la guerra, en niños de Cundinamarca, Colombia. *Revista Salud Pública*, 7(3): 268-280.
- Pham, P. N., H. M. Weinstein y T. Longman (2004). Trauma and PTSD Symptoms in Rwanda: Implications for Attitudes toward Justice and Reconciliation. *JAMA* 292 (5): 602-612.
- Quitian, H., Ruiz-Gaviria, R., Gómez-Restrepo, C. & Rondón, M. (2016). Pobreza y trastornos mentales en la población colombiana, estudio nacional de salud mental 2015. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45(S1), 31-38.
- Ramos, L. (2003). *Características, dinámicas y condiciones de emergencia de las pandillas en Bogotá*. Bogotá, Colombia.
- Realí, F., Jiménez-Leal, W., Maldonado-Carreño, C., Devine, A. y Szücs, D. (2016). Examining the link between math anxiety and math performance in Colombian students. *Revista Colombiana de Psicología*, 25(2), 369-379.
- Ritterbusch, A., León, S., Gutiérrez, J. y Maldonado, D. (2016). *La visión del sector empresarial de la educación media*. Documentos de Trabajo No. 38 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

- Red Nacional de Información (RNI) (2017). Registro Único de Víctimas, 2017. Recuperado de: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/direccion-de-registro-y-gestion-de-la-informacion/red-nacional-de-informacion-rni/37825>
- Rodriguez, C. y Sánchez, F. (2012). Armed conflict exposure, human capital investments, and child labor: evidence from Colombia. *Defence and Peace Economics*, 23(2), 161-184.
- Romero, G., García, C., Rodriguez, C. y Aguilar, J. (2015). *Juventud y políticas públicas en Colombia*. Youth Policy Review Series, Youth Policy Press.
- Saavedra, J.E., Bettinger, E., Kremer, M. y Kugler, M. (2011). Efectos de largo plazo de las becas PACES para la educación secundaria privada en Colombia. Nota de Política No. 10 de la Universidad de los Andes. Disponible en: <https://egob.uniandes.edu.co/images/np10.pdf>
- Sánchez, F. (2007). *Las cuentas de la violencia. Ensayos económicos sobre el conflicto y el crimen en Colombia*. Bogotá, Editorial Norma.
- Sánchez, F., Velasco, T., Ayala, M. C. y Pulido, X. (2016). Trayectorias de permanencia, deserción y repotencia en la educación secundaria colombiana y sus factores asociados. Documentos de Trabajo No. 36 de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo Universidad de los Andes.
- Santos, R. (2014). Not all that glitters is gold: gold boom, child labor and schooling in Colombia. Documentos CEDE, No. 31. Universidad de los Andes.
- Inseguridad (2016). Las pandillas mortales que atemorizan las ciudades. *Semana*. Disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/pandillas-en-colombia-y-posconflicto-violencia-en-las-ciudades/493273>
- Política (2017). “Pido perdón a las madres de Soacha” Álvaro Uribe. *Semana*. Disponible en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-le-pidio-perdon-a-las-madres-de-soacha-por-afectar-la-memoria-de-sus-hijos/525896>
- Springer, N. (2012). *Como corderos entre lobos: el uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia*. Springer Consulting Services.
- Torres, Y., Berbesí, D., Barreño, J. y Montoya, L. (2010). *Situación de la salud mental del adolescente: estudio nacional de salud mental, Colombia*. Organización Mundial para la Salud y Ministerio de Protección Social.

Trading Economics (2014). Colombia unemployment rate. Recuperado de <http://www.tradingeconomics.com/colombia/unemployment-rate>.

World Bank. (2016). Urban violence: a challenge of epidemic proportions. Septiembre 6, 2006.

Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/09/06/urban-violence-a-challenge-of-epidemic-proportions>

World Health Organization (2002). World Report on Violence and Health. Washington: World Health Organization.

7. Anexos

7.1 Bases de datos

Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia de Colombia (JUACO) es una iniciativa del programa presidencial Colombia Joven (www.colombiajoven.gov.co), que tiene como objetivo brindar información especializada en la adolescencia y juventud en Colombia. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/09/06/urban-violence-a-challenge-of-epidemic-proportions> cuenta con un observatorio, con series de tiempo a nivel departamental sobre educación, salud, violencia y mercado laboral, entre otros, para personas con edades entre catorce y veintiocho años. Adicionalmente, cuenta con una Ciberteca con documentos relacionados con educación, identidades culturales, consumo y producción, ciudadanía, participación social y política, políticas públicas, salud y uso de sustancias psicoactivas, inserción sociolaboral, convivencia y conflicto, espacio, territorio y movilidad y normatividad sobre jóvenes. La información de JUACO es de libre acceso y puede consultarse en obs.colombiajoven.gov.co.

6.1.1 Demografía

Estadísticas de demografía y población. Esta información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ofrece información sobre el último **censo general** realizado en Colombia (2005), **estadísticas vitales** (nacimiento y defunciones), movilidad y migración, **proyecciones de población**, series de población, grupos étnicos, discapacidad y otros. La información poblacional del Dane aparece desagregada por grupos de edad y por edades simples, por lo cual se cuenta con información sobre jóvenes. Adicionalmente, en cuanto a las estadísticas vitales es posible consultar, por rango de edad, la causa de defunción. Esta información puede consultarse en la página oficial del Dane.

6.1.2 Encuestas de hogares y multipropósito

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). Investigación del Dane para cuantificar y caracterizar las condiciones de vida de los hogares en Colombia. Se ha realizado en once oportunidades con periodicidad anual desde el 2010, la más reciente es de 2016. La ECV es representativa para el total nacional, para grandes regiones (Antioquia, Valle, Caribe, Pacífica,

Central y Oriental) y a para zonas urbanas y rurales para cada desagregación, y tiene como unidad de análisis las viviendas, los hogares y las personas (Dane, 2016b). La encuesta contiene información relacionada con la vivienda (e.g., acceso a servicios públicos, material predominante de paredes y pisos), hogares (e.g., posesión de bienes, información sobre el jefe del hogar) y personas de todas las edades (e.g., educación, salud, fuerza laboral, ingresos, gastos, fuerza laboral). Esta información es de libre acceso y puede consultarse en el Archivo Nacional de Datos del Dane.

Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA). Investigación realizada por el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes; en la actualidad es la única encuesta con alcance nacional longitudinal de hogares en Colombia. Tiene como objetivo principal generar conocimiento sobre los cambios sociales y económicos individuales y de los hogares en el país. Se realiza cada tres años para una muestra de 10.800 hogares, 6.000 en zonas urbanas y 4.800 en zonas rurales. La ELCA tiene información sobre empleo, ingresos, consumo, educación, salud, acceso a servicios financieros, primera infancia y juventud, política, choques, uso del tiempo y tenencia de tierras, entre otras. La encuesta urbana tiene representatividad en los estratos 1 a 4 a nivel nacional y en cinco regiones: Bogotá, Central, Oriental, Atlántica y Pacífica, mientras la rural es representativa para pequeños productores de las regiones Atlántica Media, Cundiboyacense, Eje Cafetero y Centro-Oriente (Cadena, 2014). Algunos contenidos de la encuesta tienen restricciones de acceso.

Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programa Sociales (Sisbén). Sistema de información diseñado por el Gobierno para identificar y clasificar a los hogares, familias y personas, que registra las condiciones de vida para el cálculo de un puntaje utilizado en la focalización de programas sociales. Tiene cobertura nacional y cuenta con información sobre características del hogar (e.g., materiales predominantes de paredes y pisos, acceso a servicios básicos), posesión de bienes, y características de los integrantes del hogar (e.g., edad, sexo, fecundidad, nivel educativo), entre otros.

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Encuesta del Dane con representatividad nacional, que cuenta con información sobre el hogar (e.g., materiales predominantes de paredes y

pisos, acceso a servicios básicos) y características individuales (e.g., edad, sexo, nivel educativo, desempleo, calidad del empleo, fecundidad). Esta información es de libre acceso y puede consultarse en el Archivo Nacional de Datos del Dane.

6.1.3 Educación

Pruebas Saber. Las pruebas Saber del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) tienen como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, realizando evaluaciones de forma periódica para monitorear el desarrollo de competencias básicas en diferentes ciclos del aprendizaje. En la actualidad, el Icfes realiza pruebas Saber para los grados 3, 5, 9 y 11, también las pruebas Saber Pro, para quienes estén concluyendo estudios profesionales y las pruebas Saber T&T para técnicos y tecnólogos. Las bases de datos de las pruebas Saber contienen información sobre los resultados por componente de los estudiantes en las pruebas, al igual que información demográfica (e.g., sexo, edad, lugar de residencia, pertenencia étnica), del hogar (e.g., educación y ocupación de los padres, posesión de bienes), y del colegio donde estudia (e.g., jornada, carácter), entre otros. Las bases de datos de Saber son de libre acceso y pueden consultarse en la página del FTP del Icfes.

Sistema de Matrículas (SIMAT). Esta base de datos, que se origina a partir de la resolución 166 (R166 del Ministerio de Educación Nacional) contiene reportes alumno por alumno matriculado en instituciones educativas oficiales y no oficiales, al igual que reportes de docente por docente y directivos docentes para instituciones oficiales. Las Secretarías de Educación recolectan la información, la cual es centralizada por el Ministerio de Educación. El SIMAT es una herramienta para organizar y monitorear el proceso de matrícula, al igual que una fuente de información para la toma de decisiones. La información del SIMAT es restringida.

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). El SNIES es un sistema de información sobre la educación superior en Colombia. Recopila información que permite hacer planeación, monitoreo y evaluación para la toma de decisiones. Dentro de este sistema también se encuentra el **Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)**, que contiene información para hacer seguimiento a características académicas y socioeconómicas de estudiantes que han ingresado a educación superior. El SPADIES

cuenta con información estudiante a estudiante sobre la carrera que estudia, si se encuentra matriculado, si recibe apoyo académico e información sobre repitencia, entre otros. La información del SNIES y SPADIES es restringida.

Base de datos de Icetex. El Icetex es una entidad del Estado que tiene como fin promover la educación superior mediante el otorgamiento de créditos educativos. En este proceso, recopila información sobre cada aplicante y beneficiarios a becas, por lo cual tiene información detallada sobre características demográficas de cada individuo (e.g., edad, sexo, estado civil, nivel Sisbén), el colegio donde estudia o estudió, y del crédito que solicita o le fue otorgado. Esta información es restringida

Programme for International Student Assessment (PISA). Las pruebas PISA son realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se realizan cada tres años a estudiantes de quince años en setenta y dos países, y tienen como propósito evaluar competencias fundamentales en tres áreas: matemáticas, ciencias y lectura (OCDE, 2016). Estas bases de datos ofrecen información sobre los jóvenes de quince años, al igual que sobre sus colegios, hogares, familias, docentes y barrios, lo cual permite analizar factores asociados al desempeño. En 2015 se realizaron las pruebas más recientes. La información de PISA es de libre acceso y puede consultarse en la página oficial de la OCDE.

Estudio sobre la caracterización de la media. La base de datos de caracterización de la media (García *et al.*, 2016) es un esfuerzo de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes para entender la educación media en el país. Estos datos fueron recolectados en el segundo semestre de 2015 y cuentan con una muestra de 562 establecimientos educativos representativa nacional, y urbana y rural de establecimientos oficiales. En el estudio se encuestaron a 550 rectores, 473 coordinadores, 1733 docentes y 25.883 estudiantes de grados décimo y undécimo. La base de datos cuenta con información general sobre los establecimientos educativos, la gestión del rector, las prácticas de los docentes y características de los estudiantes, tales como las condiciones de su vivienda, su conocimiento sobre información de oportunidades una vez se gradúen, sus expectativas y aspiraciones a futuro, y sus niveles de autoeficacia académica, social, y autoregulatoria, entre otras.

Encuesta de Clima Escolar y Victimización (ECEV). Es realizada por la Secretaría de Educación de Bogotá y recoge información de más de 120.000 estudiantes en más de 600 colegios del distrito sobre clima escolar y victimización. La base de datos contiene información demográfica de los estudiantes, consumo de sustancias, agresión, acoso e inseguridad al interior y alrededores de los colegios, uso de armas y otros.

6.1.4 Salud

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). Encuesta quinquenal adelantada por Profamilia. Cuenta con información sobre características generales de los hogares y la población colombiana, características generales y situación de las mujeres en edad fértil, salud sexual y reproductiva, mortalidad infantil, salud materno-infantil, nutrición infantil, violencia doméstica, y afiliación, percepción y uso de servicios de salud, entre otros. La encuesta más reciente (2015) cuenta con una muestra representativa de mujeres de 13 a 49 años y de hombres de 13 a 59 años, y tiene cobertura nacional con representatividad urbana y rural, seis regiones (Amazonía-Orinoquía, Bogotá, Caribe, Central, Oriental y Pacífica), dieciséis subregiones y los treinta y dos departamentos de Colombia (Ministerio de Salud y Profamilia, 2016a). Esta información es de libre acceso y puede consultarse en el Demographic and Health Surveys (DHS) Program de USAID (dhsprogram.com).

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN). Estudio poblacional colombiano para la planificación, desarrollo y evaluación de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares del país. Cuenta con el hogar y las personas del hogar como unidad de observación y tiene cobertura nacional, urbana y rural, seis regiones, catorce subregiones y 332 departamentos del país. La ENSIN cuenta con información para individuos en diferentes rangos de edad, incluidos los jóvenes. La encuesta tiene información sobre las características demográficas y socioeconómicas de los hogares, estado nutricional, actividad física, seguridad alimentaria, hábitos alimentarios y lactancia materna, entre otros.

Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO). Herramienta para obtener y procesar información para la toma de decisiones, elaboración de políticas y monitoreo del aseguramiento, financiamiento, oferta, demanda y uso de servicios de protección social. En el

SISPRO se puede encontrar información de RIPS, RUAF y PILA, entre otros. Los **RIPS**, por ejemplo, tienen información individual sobre la prestación de servicios de salud. En particular, tienen los registros de identificación del prestador del servicio de salud, el usuario (e.g., edad), la prestación del servicio, y el diagnóstico realizado, con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10.

Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM). En Colombia se han realizado cuatro encuestas de salud mental (1993, 1997, 2003, 2015). La ENSM busca brindar información sobre la salud mental, los problemas, los trastornos mentales y el acceso a los servicios de salud en Colombia para mayores de siete años (Ministerio de Salud y Colciencias, 2016). Esta encuesta tiene representatividad nacional y regional (Central, Oriental, Atlántica, Pacífica y Bogotá) para los niños (7 a 11 años), adolescentes (12 a 17 años) y adultos (18 años y más).

6.1.5 Violencia y crimen

Registro Único de Víctimas (RUV). Pertenece a la Red Nacional de Información (RNI) y cuenta con información sobre victimización en medio del conflicto armado en Colombia. Las bases de datos del RUV contienen información a nivel nacional, departamental y municipal, por año (desde 1985 hasta 2017), por hecho (e.g., amenaza, acto terrorista, desaparición, desplazamiento, homicidios, mina antipersonal, secuestro, tortura y otros), y con enfoque diferencial (género, ciclo vital, pertenencia étnica, discapacidad). La información del RUV es libre y puede consultarse en la página de la Unidad de Víctimas (rni.unidadvictimas.gov.co/RUV).

Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO). Este sistema contiene información detallada sobre cada delito reportado a la Policía Nacional. En particular, cuenta con información sobre ocurrencia de delitos como homicidios, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a automóviles, entre otros. Adicionalmente, la base tiene detalles sobre el lugar de ocurrencia del hecho, su hora y fecha, el presunto motivo, número de víctimas y edad del perpetrador o víctima del hecho.

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). La ECSC del Dane busca hacer un diagnóstico sobre convivencia y seguridad ciudadana en veintiocho ciudades de Colombia y tiene

como fin servir de insumo para realizar monitoreo a las políticas públicas relacionadas. Esta encuesta de hogares contiene información sobre ocurrencia de hechos delictivos como hurto a residencias, personas y vehículos, ocurrencia de riñas, peleas y extorsión, y la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad. Esta encuesta es de libre acceso y puede consultarse en la página de microdatos del Dane.

Estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las estadísticas del Inpec ofrecen información sobre población privada de la libertad por sexo, edad, condiciones excepcionales, nacionalidad, tipo de condena, reincidencia y otras características. Esta información es de libre acceso y puede consultarse en la página de estadísticas del Inpec.

6.1.6 Mercado laboral

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La PILA, contenida en el SISPRO, es el sistema nacional de información sobre contribuciones a salud, pensiones y seguridad social en general pagada por empleadores y empleados. Esta base contiene información censal de todos los contribuyentes del país con periodicidad mensual. No obstante, no contiene información de personas que no estén trabajando (desempleados o inactivos), o trabajando en el sector informal.

Observatorio Laboral para la Educación (OLE). Sistema de información para en análisis de la educación superior, que se basa en el seguimiento a los graduados y su empleabilidad en el mercado laboral. Este sistema contiene información sobre oferta de graduados, perfil de los graduados, ingreso mensual promedio y vinculación al sector formal. La información es de libre acceso y puede consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación Nacional.

6.1.7 Opinión pública, valores, participación política

World Values Survey (WVS). Proyecto internacional que busca entender los valores y las creencias de las persona, al igual que cómo cambian en el tiempo y se relacionan con la política. La WVS empezó en 1981 y a la fecha cuenta con seis rondas de encuestas: 1981-1984, 1990-1994, 1995-1998, 1999-2004, 2005-2009 y 2010-2014. Colombia ha participado en la tercera, quinta y sexta ronda. Contiene información representativa a nivel nacional y cuenta con información sobre características socioeconómicas y demográficas individuo a individuo, valores de género,

creencias y preferencias políticas, religión, felicidad y satisfacción con la vida, confianza en otras personas e instituciones, valores importantes, principales problemáticas del país y del mundo, participación en grupos sociales y políticos y percepciones sobre sí mismo, entre otras. La información de la WVS es libre y pueden consultarse en www.worldvaluessurvey.org

Latinobarómetro. Encuesta de opinión pública que se realiza anualmente en dieciocho países de América Latina desde 1995, siendo representativa a nivel nacional. Tiene información similar a la WVS, cubriendo temas como la democracia, políticas públicas, economía, medios de comunicación, confianza, percepciones individuales y otras. Las bases de datos pueden consultarse libremente en www.latinobarometro.org.

Barómetro de las Américas (LAPOP). Proyecto de opinión pública en América Latina. En Colombia se ha venido realizando anualmente desde 2004. La base de datos contiene información similar a la WVS y Latinobarómetro, cubriendo características demográficas y sociales de los encuestados, sus percepciones sobre los principales problemas del país, confianza en las demás personas y en las instituciones, participación en grupos sociales y políticos, preferencias políticas y victimización, entre otros. Adicionalmente, de acuerdo con nuestra búsqueda, esta base de datos es la única que permite identificar preferencias y creencias de los jóvenes relacionadas con el fin del conflicto armado en Colombia. En particular, tiene información sobre creencias de la mejor salida para el conflicto armado con la guerrilla y las bandas criminales, expectativas sobre cuán posible es una salida negociada del conflicto, creencias sobre reintegración a la sociedad de excombatientes de diferentes grupos armados y percepciones sobre cuán plausible es un perdón y reconciliación entre los ciudadanos y los excombatientes. Esta información es pública y está disponible en la página del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes para los años comprendidos desde 2004 a 2016.

Encuesta de Cultura Política (ECP). La ECP del Dane contiene información sobre la percepción ciudadana, las creencias, actitudes y valores sobre el entorno político, el conocimiento sobre el concepto de la democracia, los espacios de participación ciudadana y su utilidad, los obstáculos a la participación ciudadana, confianza hacia el proceso electoral, posiciones políticas y confianza

en las principales instituciones del Estado. Esta información es de libre acceso en la página de microdatos del Dane.

6.1.8 Uso del tiempo y prácticas culturales

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Encuesta del Dane sobre uso del tiempo de la población de diez años y más en trabajo remunerado, no remunerado y otros. Cuenta con características generales sobre los hogares y personas, cuidado de los niños, fuerza laboral, actividad principal y tiempo destinado a actividades diversas como dormir, comer, preparar alimentos, otros oficios del hogar, hacer ejercicio, ir a cine u otras actividades artísticas, navegar en Internet, y otra serie de actividades laborales y culturales. La encuesta es de libre acceso en la página de microdatos del Dane.

Encuesta de Consumo Cultural (ECC). La ECC del Dane tiene como principal objetivo caracterizar prácticas culturales y consumo cultural de la población de cinco años y más. Tiene cobertura en las cabeceras municipales y se realiza cada dos años. La ECC contiene información sobre asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, asistencia a espacios culturales (e.g., bibliotecas, monumentos, museos, galerías de arte), formación y práctica de actividades culturales, lectura de libros, revistas y periódicos y uso de Internet, entre otros. La encuesta es de libre acceso en la página de microdatos del Dane.

Documentos de trabajo EGOB es una publicación periódica de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, que tiene como objetivo la difusión de investigaciones en curso relacionadas con asuntos públicos de diversa índole. Los trabajos que se incluyen en la serie se caracterizan por su interdisciplinariedad y la rigurosidad de su análisis, y pretenden fortalecer el diálogo entre la comunidad académica y los sectores encargados del diseño, la aplicación y la formulación de políticas públicas.

egob.uniandes.edu.co

   | GobiernoUAndes